



SEXTANTE



Conflicto y paz

Víctimas, las voces que no serán calladas

Pág.: 7

“La única protección de un maestro es una tiza y un borrador”

Pág.: 14

Retornar no siempre es volver

Pág.: 18

Colombia necesita más Juegos por la Paz

Pág.: 23

Ser incluyentes y críticos: el reto de los medios

Pág.: 27

Conflicto, negociación y medios

RECTOR

Fray José Wilmar Sánchez Duque

DECANO

Ancízar Vargas León

**DIRECTORA PROGRAMA
DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Teresa del Pilar Niño Benavides

COORDINACIÓN EDITORIAL

Alexánder Hernández Marín
Pablo Andrés Huertas Obregoso

DIRECTORES

Alexánder Herrera Gil
Esteban Hernández Sepúlveda
Jimmy Ortiz Rojas
Jorge Ramírez Franco
Karenm Villada Bedoya
Santiago Loaiza Villa
Valentina Herrera Cardona

JEFES DE REDACCIÓN

Alejandra Echeverri Garzón
Angie Parra Mejía
Carolina Cortés Duque
Juanes Ceballos Blandón
Juliana Ospina Gómez
Luisa Jaramillo García
Luisa Loaiza Tamayo
Natalia Llanos Zapata

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Alejandra Echavarría Zapata
Leidy Yuliana Muñoz Rivera
Duván Sepúlveda Rúa
Manuel Osorio Solano

FOTOGRAFÍA DE PORTADA

Melissa Tatiana Ospina Yanes

DOCENTES ASESORES

Alba Shirley Tamayo
Ana Lucía Mesa Franco
Ancízar Vargas León
Cristian Cartagena
Fernando Aquiles Arango Navarro
Gabriel Lotero Echeverri
Gloria Lucila Agudelo
Jaime Alberto Rojas Rodríguez
Marcos Vega Señá
Nubia Mesa

IMPRESIÓN: El Mundo

Proyecto de aula de
los estudiantes del curso
Producción de Prensa del
cuarto semestre

Programa de Comunicación Social

Facultad de Comunicación Social
y Publicidad

Fundación Universitaria Luis Amigó
Noviembre de 2014

Ancízar Vargas León

Es natural que hablar de postconflicto en Colombia genere todo tipo de debates. Algo similar sucede cuando se pregunta por quiénes son las víctimas del conflicto y si un militar o un guerrillero podrían serlo. Sin embargo, varias de estas confrontaciones terminan siendo discusiones bizantinas, o sea que no tienen mucho sentido y conducen solo a enemistar más a los ciudadanos.

La pregunta entonces es: ¿qué sí tiene sentido? La Cátedra Unesco de Comunicación y diversos sectores de la sociedad analizan la situación del país y, mediante varias investigaciones, presentan una serie de ideas relacionadas con el conflicto, la comunicación y los medios, el diálogo, la negociación, la paz y el postconflicto.

Lo primero y más necesario es el llamado de Freddy Leonardo Reyes Albarracín y Pablo Felipe Gómez Montañez, quienes relacionan la memoria y la comunicación con los escenarios estratégicos para encarar una eventual transición política y social, dada una dinámica de amnesia colectiva generada por grupos poderosos interesados en el olvido, con la supuesta garantía de permanecer e incrementar su poder. La comunicación y los medios son vitales en la recuperación de la memoria histórica.

Julio Eduardo Benavides presenta una relación entre memoria, comunicación y comunicabilidad, y considera que estos son elementos para aportar a la reconciliación en un futuro determinado. Dentro de tantas historias posibles rescata “el relato de las víctimas de la violencia armada en el contexto de su actuación política”.

En la recuperación de la memoria de país se debe tener sumo cuidado, puesto que las narraciones desde los grandes medios tienen sesgos muy pronunciados. Darío Reynaldo Muñoz Onofre, mediante una investigación, construye una crítica de la gestión mediática de la guerra y el heroísmo patrio bélico.

En sus resultados presenta a los medios de comunicación como industrias de opinión y propaganda bélica, además de identificar su papel “en la promoción de la guerra total”, específicamente en 2002. Evidencia una “relación de mutua constitución entre discursos mediáticos y opinión pública favorable a la guerra”, para lo cual se promovieron nacionalismos entorno a un “heroísmo bélico”. Los medios

glorifican el papel de las fuerzas armadas y luego se conocen los “falsos positivos” que destrozaron los hogares de todas las víctimas.

Por su parte, Mario Morales se pregunta: ¿Narrar la guerra... en paz? La investigación entiende que buena parte del cubrimiento de la problemática social “ha sido fundamentalmente emocional, vale decir, atado a la temperatura del estado de ánimo nacional”, lo que da cuenta de una necesidad urgente de responsabilidad y rigor periodístico, con equidad y no exclusividad de fuentes.

A este fenómeno se suma lo que Guillermo Mastrini denomina “la concentración de la propiedad de los medios como un problema de regulación”, en tanto no se garantiza la debida defensa del pluralismo informativo como fundamento para la participación ciudadana.

De fomentarse un periodismo más participativo y que garantice las voces de otros protagonistas y verdades, permitiría un nuevo ambiente y el reconocimiento de diferentes realidades, tal como lo presenta Leonardo Herrera Delghams en su texto denominado: “Crónicas sobre masacres y desarraigo”. Allí alude a la memoria histórica de víctimas en la zona Caribe de la nación. El recuerdo de siete masacres contra la población indefensa cometidas por los paramilitares, con la disculpa de combatir la guerrilla y defender un gobierno. Los sobrevivientes iniciaron un proceso de retorno y conservación de su identidad, a lo cual, el periodismo puede brindarles un reconocimiento informativo que aporte a la elaboración de sus duelos.

Las investigadoras Sandra Liliana Osses Rivera y María Teresa Suárez González complementan este análisis en su trabajo “Lo que encubre la violencia. Conflicto social, orden político y discursos mediáticos”, que hace parte del proyecto “Conflicto social, orden político y discursos mediáticos en América Latina”. Ellas hacen énfasis en los costos humanos de los conflictos y el papel que debe cumplir el periodismo serio en la construcción de discursos alternativos a la guerra y por un estado de reconciliación.

De ahí la pregunta por los retos y límites del periodismo de paz en Colombia. Antoni Castel identifica la necesidad del desarrollo de un nuevo paradigma en la cobertura de los conflictos, basado en su orientación a la paz y la verdad y bajo la consigna de “todos ganan”. Aquí está

en juego la concepción de espectáculo, propiedad de los medios, actitud de las audiencias. Castel entiende que “la agenda sensacionalista no es exclusiva de la televisión colombiana”. En el país se ha demostrado que a cambio del “espectáculo de la guerra” otra información alcanza grandes audiencias, como deporte, arte, emprendimiento, liderazgos sociales, ciencia y otras acciones de interés social.

Agrega Castel que el comunicador debe prepararse tanto para tiempos de conflicto como para tiempos de paz. “Los medios de comunicación deben contribuir, como mínimo, a que el conflicto no escale”, o sea que no se incremente. Asegura que el periodismo debe contribuir con la resolución de conflictos desde su función mediática y cuando la sociedad se encuentre muy polarizada se deberá conservar la “cabeza fría” y presentar la información con ecuanimidad y equidad.

Con base en la investigación “Medios ciudadanos y conflictos urbanos”, realizada por Joaquín Alonso Gómez Menezes, y teniendo como fondo la Comuna 13-San Javier de Medellín, se deduce que existe una información de interés público, la cual debe convertirse en una “herramienta para el ejercicio de la condición de ciudadanía en la actualidad”.

Es lógico que en la coyuntura actual se presenten diversas interpretaciones. Luis Fernando Marín Ardilla, en su indagación “De semánticas y formas de saber del conflicto y postconflicto en Colombia”, explica que el discurso del poder tiene la intencionalidad de dominar las mentes, de tal modo que caer en su trampa significa perpetuar la guerra. Por ello el papel de comunicadores y periodistas es superar los intrínquilos semánticos y concentrarse en el mundo de las soluciones.

Miquel de Moragas insiste en que “todos los esfuerzos de las políticas de comunicación deben concentrarse en la producción de información de calidad”, la cual debe estar por encima de las pasiones y a la altura de la mayoría de los ciudadanos.

En conclusión, como lo expresa Christian Camilo Peñuela Gallo, la autoformación en medios de comunicación hace parte de las estrategias de organizaciones de medios y colectivos juveniles vinculados con movimientos sociales, en tanto se trabaja por una reforma profunda de los medios masivos y políticas públicas de información que garanticen pluralidad, inclusión, equidad, respeto y la diversidad de fuentes informativas. ▲

De los 32 departamentos que componen el territorio colombiano, Antioquia ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado, dejando como resultado miles de muertes, familias desplazadas y pueblos en el dolor.

Yesica Pérez Peláez
yesica.perezpe@amigo.edu.co



Hasta octubre de 2014, el Registro Único de Víctimas reportó 1.414.405 personas afectadas por el conflicto armado en Antioquia. Fotoilustración: Yesica Pérez

Antioquia: décadas que suman víctimas

El informe *Contexto de Violencia y Conflicto Armado*, escrito por Ariel Fernando Ávila Martínez, coordinador del Observatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris, señala que entre los años 1999 y 2001 se intensificaron los secuestros y desplazamientos, debido a la expansión de grupos paramilitares en el departamento.

Al respecto, Max Yuri Gil Ramírez, sociólogo y coordinador del programa Violencias, Migraciones y Memorias en la Corporación Región, menciona que en este departamento surgieron las principales dinámicas de violencia que han caracterizado el conflicto armado en Colombia.

Cifras del informe *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2013, muestran que en Antioquia desde 1980 hasta 2012 se cometieron 598 masacres, la mayoría, concentradas en los municipios de Medellín (48), Turbo (42), San Carlos (32) y Apartadó (31). A esto, Gil Ramírez agrega que “el departamento constituye el 20 % de las víctimas del país, o sea, tenemos más de 1.300.000 víctimas registradas en Antioquia de las 6.600.000 que hay en el país”. La lista de informes sobre este tema aún no termina.

Grupos armados en Antioquia

Los inicios del conflicto armado en Colombia se remontan a los años treinta, e incluso más allá, producto de la desigualdad en la distribución de las tierras y la exclusión e injusticia social y política que vivía el pueblo colombiano. En esa época existía una lucha constante entre conservadores y liberales, partidos políticos en los que se dividía el país. Una de las consecuencias de esta situación fue el posterior nacimiento de las primeras formas de guerrilla y luego de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Han pasado más de cuatro décadas; son 56 años en los cuales el conflicto armado ha permeado y se ha instalado en el país. Un conflicto que deja más de 220.000 personas asesinadas, 25.007 desaparecidas, 5.712.506 desplazadas, 16.340 asesinatos selectivos, 27.023 secuestrados. Estas cifras, y algunas más, están consignadas también en el informe *¡Basta Ya!*

El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario presentó en el reporte *Algunos indicadores sobre la situación de Derechos Humanos en Antioquia*, del año 2005, que grupos armados como las Farc, el Eln y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tuvieron mayor presencia en los límites con el Chocó, Magdalena Medio, Urabá, Nordeste, Suroccidente y Occidente antioqueño y que además, eran “financiados y liderados por miembros del narcotráfico y esmeralderos como Gonzalo Rodríguez Gacha, Fidel Castaño Gil, y Víctor Carranza, entre otros”.

Para el sociólogo y docente de la Universidad de Antioquia, Héctor Londoño Lozano, dichos grupos llegaron atraídos por la riqueza de estas regiones del departamento, supliendo la necesidad de seguridad de habitantes y dueños de tierras, en la que el Estado se quedó corto: “Se deslegitima al Estado y se legitima al ilegal”, enfatiza Londoño Lozano.

Conflicto por despojo de tierras

La disputa por la tierra y el despojo de esta, ha sido el escenario de constantes conflictos entre los grupos armados ilegales, los campesinos y el Ejército colombiano. Según el documental realizado por Verdad Abierta en 2012: *Despojo de tierras en Urabá*, seis municipios de esta subregión fueron despojados de 41.790 hectáreas, posicionando a Antioquia como el segundo departamento del país con el mayor número de reclamaciones de restitución de tierras por víctimas del despojo y abandono forzado, con 3.132 solicitudes por despojo entre los años 2011 y 2013, cifras reveladas por la Unidad de Restitución de Tierras en el año 2013.

Urabá, la región bananera y platanera más importante del país, situada en una zona estratégica para el desarrollo de sistemas agroindustriales y en la costa antioqueña, ha sido el foco de interés de diferentes grupos armados ilegales que, según el documento publicado por la Universidad Eafit y la Gobernación de Antioquia: *Urabá: entre la abundancia y la disputa territorial*, buscan “establecer un control terri-

torial para el desarrollo de sus ideologías y el establecimiento de actividades como el narcotráfico, incrementando los niveles de violencia de la región”.

Dos décadas infames

En este texto se menciona que “durante las dos últimas décadas, esta región se convirtió en uno de los escenarios más violentos del país, con crisis humanitarias por violación de los Derechos Humanos, el desplazamiento y las masacres”, reflejadas en los miles de rostros y núcleos familiares que han sido afectados.

Según cifras del informe *Contexto de violencia y conflicto armado*, “el menor número de desplazados en el departamento se dio en el año 1999: 11.234 personas desplazadas. Por su parte, el número de secuestros aumentó de manera continua entre 1997 y el año 2000, registrándose el mayor pico, 683 secuestros, en 2000”.

Además, en el informe *Algunos indicadores sobre la situación de Derechos Humanos en Antioquia*, el promedio de secuestros en el país entre los años 2000 y 2004 se concentró el 17% en este departamento, agregando que el número de personas desplazadas aumentó: pasó de 74.385 en el 2000 a 90.299 en 2001.

El programa Adopta un Secuestrado, liderado por la Universidad de la Sabana, precisa que el secuestro surge en la mitad de la década de los sesenta como vía de los grupos armados para financiar sus actividades ilegales. En las décadas de los setentas y ochentas, tiempos de Pablo Escobar Gaviria, este método se utilizó como mecanismo de presión para cambiar muchas de las leyes políticas y penales nacionales.

Por otra parte, el desplazamiento forzado es otro de los efectos del conflicto

armado en Colombia, pues las disputas entre los entes armados como el Ejército, los paramilitares, las Farc, entre otros, genera en las personas miedo, que los hace huir de los constantes ataques y buscar un lugar alejado de la guerra. En el *Informe nacional de desplazamiento forzado en Colombia 1985 a 2012* se revela que Antioquia es el departamento más golpeado por el desplazamiento forzado con 924.140 víctimas, más del doble de personas afectadas en Bolívar con 411.610, ambos departamentos han sido por años el epicentro de violencia generada por el conflicto armado en el país.

A su vez, el abogado y docente Farid Castañeda Pulgarín plantea que existe otro tipo de desplazamiento, al cual llama “desplazamiento intencional”: los habitantes de pueblos azotados por actores armados se desplazan dentro del mismo, estando bajo las órdenes de diferentes grupos, tal como ocurrió en San Carlos, Oriente antioqueño, donde las Farc patrullaban el pueblo y los habitantes estaban supeditados a las normas de estos. En la zona urbana de ciudades grandes y chicas se habla de fronteras invisibles.

El sociólogo Max Yuri Gil concluye que el tema de desplazamiento ha sido uno de los más visibilizados en los últimos 20 años en Colombia, y agrega: “Hay desplazamiento hoy, la gente tiende a pensar que eso ya es pasado, y todavía hay en muchos lugares del país”.

Innumerables estudios confirman que la violencia generada por el conflicto armado está en la memoria de los colombianos, en nuestro presente como en nuestro futuro, es algo que tristemente nos identifica como país, pues ya sea directa o indirectamente todos hemos sido víctimas. ▲

“Muchachos, les digo a todos los vecinos de las selvas la corneta esta sonando... itirarnos hay en la sierra!”
Epifanio Mejía

“Hay desplazamiento hoy, la gente tiende a pensar que eso ya es pasado, y todavía hay en muchos lugares del país”.

La noche en que todo cambió

Laura Oquendo Herrera

laura.oquendohe@amigo.edu.co

“No salimos de la casa ni dormimos hasta que no se escucharon más tiros. Fue una noche en la que pensamos que nos iban a matar, se escuchaban los tiros muy cerca, lo único que hicimos fue no salir hasta que todo se calmara. Después de varias horas decidimos salir y vimos un señor muerto afuera de la cocina de la casa: tirado y ensangrentado, con la cabeza en toda la puerta. Esto fue lo que nos hizo ir de la casa y abandonar todo”, cuenta Marina.

De acuerdo con los datos del Registro Único de la Agencia Presidencial para la Acción Social entre 1998 y 2005, en el Occidente antioqueño se registraron 54.197 personas expulsadas y 21.512 personas recibidas por cuenta del conflicto armado, lo cual evidenció que, en esa época de balas, sangre y desplazamiento, cerca del 40 % de la población que salió de esta región no retornó a ella. El desplazamiento forzado en esta región fue especialmente crítico en los años 2000 y 2001. En el primero, 15.563 personas fueron expulsadas de sus municipios por no compartir “la causa” de alguno de los dos bandos enfrentados y, en el segundo, el número de personas que tuvieron que abandonar sus casas por una guerra ajena creció en un 32 %, lo que significó 20.486 nuevos desplazados.

Uno de tantos hechos fue la muerte de un hombre frente a la casa de Marina, un presunto guerrillero de las Farc. Cuenta Marina, ya con la calma que le trajo la experiencia de haber sobrevivido a decenas de enfrentamientos entre “paras” y guerrilla, pero con el miedo de un pasado vivo, que “hacía dos meses que [el hombre] había llegado a la vereda. Nadie sabía de él. Era un forastero y, según lo que se escuchaba de él, era que venía de Urabá (otra región de Antioquia), que trabajaba con los guerrilleros, que era el encargado de darle información al frente 34 de las Farc”.

Jorge Correa Chica, comandante del Distrito de Policía en Santa Fe de Antioquia, cuenta que el frente 34 de las Farc surgió en 1988, y era el encargado de las operaciones delincuenciales en los municipios antioqueños de Dabeiba, Frontino, Uramita, Cañasgordas, Abriaquí, Giraldo, Santa Fe de Antioquia, Caicedo, Anzá, Betulia, Urrao, Vigía del Fuerte y Murindó, además de las localidades chocoanas de Beté, Quibdó y Carmen del Atrato, en su época de mayor expansión, precisamente entre finales de la década de los noventa y comienzos del nuevo milenio.

Una larga noche

Relata Marina, mientras se toma una taza de chocolate en el corredor de su vieja casona de cinco habitaciones y pasillos infinitos, que “el hombre llegó a la vereda La Sierrita manejando una chiva no muy grande. Las autodefensas, al parecer, ya lo habían vigilado y sabían

Marina es una campesina que se vio obligada a abandonar su casa junto a su esposo e hijos, dejar sus cultivos y su ganado, cuando en una noche de mayo de 1998, en la vereda La Sierrita del municipio de Giraldo se enfrentaron las autodefensas con la guerrilla a tan solo diez metros de su casa.



Giraldo ha sido uno de los tantos municipios de Antioquia que ha sufrido el flagelo del conflicto armado en Colombia. Foto: Leonardo Alcaraz

que él era el encargado de enviar toda la información relacionada con su accionar a este frente de las Farc. Las autodefensas habían tomado el poder de la vereda, eran los encargados de elegir a quien entraba y a quien no”.

Esa noche de mayo de 1998, el supuesto guerrillero iba subiendo a la vereda en su “chiva” (vehículo para trocha). De un momento a otro, recuerda Marina, comenzó un tiroteo tan intenso que se asemejaba a un toma a las que estaban acostumbrados a hacer estos grupos ilegales, y fue en ese instante cuando las autodefensas le hicieron el atentado. Asesinaron a dos hombres y a él le propinaron varios impactos de bala, pero, como si se tratara de una película de ficción, logró correr malherido hasta la casa de Marina. Allí no aguantó más las balas asesinas y murió. Para sorpresa de Marina, a unos metros de donde fue impactado, se encontraron un bolso que llevaba el recién asesinado, el cual tenía crema de dientes, jabón y sal, elementos que, según los vecinos del lugar, sólo portaban los guerrilleros de las Farc.

Según el libro *Panorama actual del Occidente antioqueño* del Observatorio Presidencial de Derechos Humanos, “al inicio de los años noventa, la actuación de los gru-

pos de Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) fueron constantes en Dabeiba, Frontino, Uramita, Peque, Cañasgordas, Sabanalarga, Buriticá, Abriaquí y Giraldo. En esta porción del territorio, además de los eventos relacionados con la confrontación entre guerrilla y Fuerza Pública, tuvieron gran impacto acciones como masacres, asesinatos selectivos y amenazas originadas en estos grupos”.

“Las autodefensas habían tomado el poder de la vereda, eran los encargados de elegir a quien entraba y a quien no”.

Marina y su familia tuvieron un rotundo cambio de vida, al estar obligados a abandonar sus tierras, cultivos, ganado y su casa. Se marcharon al municipio de Giraldo, con la intención de protegerse de los ataques entre los grupos armados de la zona; aunque regresaron el día siguiente a dicho enfrentamiento, su estadía en la vereda La Sierrita no fue muy larga, decidieron irse en vista de las acciones continuas de los grupos ilegales.

Arraigo a la tierra

Aníbal, tío de Marina, cuenta despacio y con miedo, que no dejó su casa a pesar de todos los enfrentamientos que vivió en la vereda La Sierrita y que se encargó de cuidar la casa y las tierras de su sobrina, mientras ellos decidieran volver. Una tarde del mes de agosto de 1999, Aníbal se dirigió para la escuela Centro Educativo

Rural La Sierrita, a cincuenta metros de la casa de su sobrina Marina, recuerda que “estaba en la escuela llevando unos encargos, cuando, de un momento a otro, empezó a sonar un tiroteo, explosiones, y se escuchaban muy cerca de mí. Resulta que se estaban enfrentando las autodefensas con el poco de guerrilla que quedaba en la zona. Lo único que hice fue tirarme al piso y rezar. Como a la hora vi un guerrillero que estaba herido corriendo detrás de la escuela. Yo me asusté y no miré para dónde seguía. Lo único que sabía era que no iba a terminar bien porque detrás de la escuela solo había monte abajo y una quebrada, pero se tranquilizó todo y me fui para mi casa y me encerré”. Los recuerdos lo invadían dejando entrever la angustia de esos instantes, aun así se vislumbraba la tranquilidad que solo le podía producir el hecho de haber dejado aquel tiempo atrás.

De acuerdo con cifras del sitio web del Ejército Nacional, el número de combatientes del frente 34 de las Farc pasó de 280 en el año 1999 a 184 en el 2008. El secuestro era el delito predilecto de ese frente, y en el año de 2001 dicha cuadrilla cometió 25 plagios, ejecutó dos masacres, asesinó a cinco personas y se tomó dos poblaciones.

Aníbal, ya con un poco de confianza, dice que “a pesar de tantos años, aprendí a vivir con estos grupos armados y nunca me metí con ellos. Esta fue la clave para que no me pasara nada y no tuviera ningún motivo para hacerme algo”.

Después de varios años, Marina y su esposo fueron a la vereda a revisar el estado de su casa y de las cosas que dejaron. “Mi esposo se empezó a enfermar de pena moral, por dejar su casa, su tierra y todo lo que tenía construido en la vereda. Subir una vez a la semana a ver cómo estaba la casa lo llenaba de tristeza porque poco a poco esta se fue cayendo. Al verla caída y abandonada no pudo con el dolor y esto le causó la muerte”.

Ahora Marina vive en la ciudad de Medellín con una de sus hijas; pero Ramón y Jorge, dos de sus hijos, regresaron a su lugar de nacimiento y donde pasaron gran parte de su infancia. En La Sierrita comenzaron de nuevo, cada uno tiene su casa, sus cultivos y su propia familia. Jorge vive al lado de su casa de antaño, la que en otrora fue una casa grande y de la que hoy en día no quedan sino tejas rotas y paredes caídas. Su único aliciente es la esperanza de devolverle la vida a la casa que durante tanto tiempo fue su hogar.

Según datos del portal web del Ejército Nacional, desde el 2012 el municipio de Giraldo no registra haber sufrido atentados causados por el conflicto armado, el grupo de las autodefensas se desmovilizó y el frente guerrillero no opera de igual forma en la zona, pero sigue haciendo presencia en el municipio de Caicedo. ▲

Al rebusque en la gran ciudad

Yenifer Yepes Román
yenifer.yepesro@amigo.edu.co

El Valle de Aburrá está adornado con gigantescas montañas a su alrededor que engalanan de empuje su periferia. De día se mueve al ritmo del Metro y de las Gordas Botero, recibiendo a innumerables visitantes; de noche, lo hace entre grandes farolas que iluminan opacamente las aceras, resguardando a unos cuantos que sin pedir permiso deciden quedarse.

El drama de Óscar Giraldo Ramírez y José Antonio Avendaño, parecido al de muchas otras personas víctimas del desplazamiento forzado, empezó hace 15 y 20 años, respectivamente, en el barrio La Iguañá, lugar de invasión por aquel entonces, y que servía de acogida para todo el que por diferentes circunstancias decidiera llegar a Medellín, en palabras de Óscar, a "rearmar su vida".

Para Óscar y José los hechos no han sido fáciles de sortear. La visibilización de las víctimas del conflicto hace 20 años no tenía la trascendencia de hoy, entre otras cosas, porque los esfuerzos del Estado estaban concentrados en la guerra contra los carteles del narcotráfico, especialmente el de Medellín. Por esta razón, quizás, estos dos hombres, quienes reflejan su dolor en una mirada incrédula de un futuro mejor, aún no se atreven a validar ante el Gobierno su condición de víctima o, tal vez, porque simplemente desconocen el proceso para ser reconocidos, pues son, según el portal Verdad Abierta, un 12 % de víctimas que aún no ha sido reconocido.

La cotidianidad de la informalidad
Óscar amasa la harina de seis y treinta a once de la mañana mientras, entre el aceite ardiente, dan vuelta, como si se quejaban de su suerte, los quince buñuelos que echa por tanda a su freidora. En el mismo carrito, ya con olladas de hogao y guacamole, permanece de cuatro de la tarde a nueve de la noche vendiendo pequeños patacones a las afueras de la Fundación Universitaria Luis Amigó, donde lleva trece años "rebuscándosela" para no sucumbir ante la mendicidad urbana a la que el olvido estatal ha dejado llegar a otros desplazados.

"También llegué a La Iguañá y allá conocí a mi esposa, igualmente desplazada. Dejé atrás la vereda, la finca donde vivía con mis padres y hermanos a los 20

Una de las principales causas del aumento en los niveles de informalidad laboral en el país es el desplazamiento, que obliga a las personas afectadas a buscar empleo en actividades no reglamentadas, aumentando la cifra de desplazados informales a un 95% a mayo de 2014.

años. En San Carlos, Antioquia, sembrábamos café y teníamos ganado, pero la guerrilla y los paramilitares nos amenazaban por colaborarles a unos o a otros, hasta que la violencia nos quitó todo", relata como para sí mismo Giraldo, entre sus dientes, mientras siguen dando volteretas los buñuelos.

Asimismo, por los alrededores de la Luis Amigó y el Estadio, manzanas, mandarinas, aguacates, mangos y bananos se pasean desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde en una carreta de tablas pintadas azul ocre blanqueado, con profundas ranuras, que dejan entrever los diez años que la ha echado a andar José Antonio. En su "mula", como él llama a este artefacto que le da de comer, las frutas frescas combinadas con el gris de los edificios y el humo de los automóviles parecieran más perecederas, y José las tiene que vender antes de que algún pelo en forma de algodón le dé por manifestarse y dañarle el surtido, cosa que ocurre muy a menudo con este clima medellinense: "Cada vez más caliente", afirma.

A José le tocó salir de su finca en Urao, Suroeste antioqueño, hace veintidós años. "En la finca teníamos granadillas, curubas, y ganado. Vivía con mis seis hijos, mi esposa, mis hermanos y mis padres. Pero hubo un tiempo de muchas amenazas y los paracos se creían los dueños de todo. Yo simplemente me vine llamado con mis hijos y mi mujer, no pude sacar nada, me vine antes de tiempo, antes de que me mataran", recuerda con melancolía, mientras ofrece sus frutas.

Tanto Óscar como José son trabajadores informales, que encontraron en una actividad no reglamentada el sustento para su familia, al igual que los cinco de cada diez trabajadores que se registran como informales en el país: el 49,4 %, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Lo anterior demuestra que una de las principales causas de la informalidad laboral en Colombia es el desplazamiento forzado de campesinos, que llegan a las

ciudades receptoras a engrosar las listas de desempleados y de informales con necesidades básicas insatisfechas, a lo que se suman las desventajas en cuanto a competencias laborales, que los lleva a sobrevivir de cuenta del rebusque.

Medidas insuficientes

Entre los derechos fundamentales que se le debe garantizar a la población desplazada están la vivienda, la salud, la educación, la formación y la generación de empleo. La Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, en su Capítulo VI, habla sobre la formación y generación de empleo. El Gobierno, a través del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), está obligado a diseñar programas y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbano con el fin de apoyar el autosostenimiento de las víctimas.

Según Lila Hernández, de la Unidad de Víctimas del barrio Belencito, lo que realiza el Gobierno es una labor de apoyo a un proyecto productivo con capacitación, y brinda una ayuda monetaria de hasta dos o tres salarios mínimos, mas no les debe garantizar un empleo.

"La población desplazada beneficiada

recibe una ayuda cada veintidós días. El Gobierno con esto les apoya las ideas productivas, pero ya la persona desplazada debe tener el proyecto montado y estar trabajando, mas no existe ningún proceso de articulación laboral", explica Lila, lo que contradiría lo consagrado por la Ley 1448 en sus artículos 130 y 131.

Para Héctor Londoño Lozano, un sociólogo que trabaja de manera independiente con las víctimas del conflicto, el llegar a un espacio distinto en "cinturones de miseria" es un primer factor que fortalece la informalidad, debido a que mientras al desplazado le llega la ayuda del gobierno, este trabaja informal o ilegalmente.

Apunta también que es la misma institucionalidad la que dificulta las puertas para la formalización y hace de esa tramitología un proceso difícil, puesto que no tiene en cuenta el nivel de educación o analfabetismo con el que llega parte de la población desplazada (el 35 % en los adultos, según el Ministerio de Educación) y los trámites les exige leer, diligenciar y firmar documentos. A pesar de esto, Héctor rescata el ejercicio de articulación laboral: "Medellín siempre ha sobresalido por una oferta institucional muy alta, y hay mucho ejercicio de articulación con la empresa privada. Aquí sí hay ofertas de empleo, pero como las personas, en este caso los desplazados, no saben leer ni escribir, no buscan".

Mientras Óscar amasa buñuelos y José empuja su carreta por los alrededores del Estadio, ambos siguen a la expectativa de que se les reconozca como víctimas y, aunque están conformes con las actividades que realizan, no pierden la esperanza de que el Gobierno y la sociedad los tenga en cuenta, desde su informalidad, como gestores y constructores de un nuevo país que no arroje ni una gota más de violencia por un conflicto de medio siglo.



La informalidad laboral en Medellín y otras ciudades del país ha aumentado con la llegada de campesinos afectados por el desplazamiento forzado. Foto: Yenifer Yepes

Una vida sin calidad después del desplazamiento

María Alejandra Ramírez Castaño
maria.ramirezst@amigo.edu.co

La advertencia fue dada la noche del 20 de mayo de 2007. Luego de escuchar unos firmes golpes en la puerta de su finca, ubicada en el corregimiento de Altamira, municipio de Betulia, Adriana García se paró de la cama sin ponerse sus sandalias y con su esposo tras ella, preguntó, alzando la voz, quién estaba al otro lado de la puerta, obteniendo como respuesta: ¡el Ejército Nacional!

La mujer de contextura gruesa, algo atemorizada, pero con decisión, abrió la puerta. “De una nos encañonaron”, recuerda Adriana. “Nos tiraron para adentro y apagaron la luz, porque yo la había prendido para abrir”. Los minutos pasaban, mientras que los encapuchados, con voces fingidas, les indicaban a los retenidos que debían transmitir un mensaje y pedir un dinero a David Correa, el dueño de la finca donde trabajaba José Piedrahita, esposo de Adriana, como administrador. Luego de esto, los inoportunos visitantes se fueron. La pareja trataba de calmarse, mientras que sus hijos Duván Martínez, de once años de edad, producto del primer compañero sentimental de Adriana, y Ángel Piedrahita, de cinco años, hijo de José, dormían.

La razón llegó a Correa, con la advertencia que el monto debía ser pagado en los próximos días, y que la Policía no podía saber nada: “Porque si lo hacíamos nos iban a quemar toda la finca con nosotros adentro (...) con todo”, expresa la mujer angustiada. Correa se comunicó con la Policía y José tuvo que ir al Centro de Atención Inmediata, ubicado en el casco urbano, para narrar la pesadilla. El grupo armado, del que nunca se supo su identidad, no se quedó quieto; como respuesta a la acción del finquero, empezaron las intimidantes llamadas telefónicas, haciendo que los cuatro integrantes de la familia buscaran amigos cercanos para quedarse por unos días, mientras era olvidada la amenaza hecha por aquel grupo armado.

Al cabo de un mes, las llamadas terminaron. Con todas sus pertenencias en la casa y una vida que continuar regresaron a ella. “Todos verracos arrancamos, nos fuimos para la casa y llegamos tarde. Llegamos como a las seis de la tarde; y como a las siete sentimos la gente otra vez, eso era impresionante”, relata Adriana. Los perros ladraban sin cesar, como tratando de avisar que aquellos hombres habían vuelto.

“Para mi familia, ese grupo estaba en complicidad con la Policía. Entonces resulta que tocaron la puerta y era el teniente; yo me asomé y abrí, él me preguntó si lo habíamos llamado y nosotros estábamos muertos del miedo, temblando; como en el momento en que se espera que vengan por uno”, enuncia la madre,

Enfrentar el desplazamiento forzado generado por el conflicto armado es apenas el inicio para algunas familias; las necesidades que deben afrontar en los sectores de invasión no son acordes con una calidad de vida digna.



La vereda Manantiales, ubicada en laderas del municipio de Bello, es uno de los lugares escogidos por las familias afectadas por el conflicto armado para vivir. Foto: Daniel Pulgarín

mientras aprieta sus ojos y las lágrimas caen por sus mejillas.

Tirados en el suelo, esperaron a que la seguridad pública diera las buenas nuevas diciendo que el enemigo se había apartado del campo, aunque ellos no estuvieran convencidos. “Al otro día, nos tuvieron que sacar de allá”, afirma.

En busca de la tranquilidad

Durante los últimos quince años, en Colombia la cifra de individuos que han perdido más que sus territorios, ha aumentado a 296.988 anualmente. En Antioquia, para el 2012, se registraron 61.252 personas que arribaron al departamento, como se señala en la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en el informe de 2012 denominado: *La crisis humanitaria en Colombia persiste*.

La familia en mención no quedó por fuera de esta cifra y debió migrar a otro rincón de Colombia, con el corazón guardado en el bolsillo, pero con los integrantes del círculo familiar completos, pues afortunadamente no sumaron a las listas de muertos en el país.

Después de buscar oportunidades e intentar adaptarse a una ciudad congestionada por los medios de transporte, donde sus habitantes son esclavos del apuro, Adriana, quien ya se había separado de su compañero, encontró en la vereda Ma-

nantiales del municipio de Bello un lugar para empezar con una nueva pareja, padre de su tercera hija Natalia López, y sus otros dos hijos. “Llegamos con la ropa y una cobija de estas (Adriana señala una similar, que está sobre la cama de su casa actual). “Mi mamá vivía en Carambolas, de aquí para arriba. Ella tenía una pieza que estaban construyendo, entonces nos metimos en esa pieza así”, puntualiza.

La vereda Manantiales está ubicada en una de las montañas que rodean a la ciudad de Medellín. Un lugar donde la mayoría de habitantes son obreros de construcción, recicladores o trabajadores en servicios varios; allí escasea el cemento en los espacios peatonales, pero abunda la tierra y el pantano cuando llueve. Sin embargo, sus casas pueden reconocerse desde lejos por el brillo que reflejan sus techos de lata. Una casa construida en el comienzo de las escaleras para ascender a la vereda fue ocupada por la familia de ahora cinco miembros. Entre sonrisas, Adriana narra: “(...) había un ranchito; entonces lo arreglamos un poquito y ya. Vivimos ahí un tiempo y ese fue el que encontró Techo cuando vino”.

Necesidades: una lista de no acabar
Techo es una organización no gubernamental (ONG), que tiene como objetivo superar las situaciones de extrema pobreza en asentamientos precarios, a través

de la construcción de viviendas de emergencia y de la promoción de proyectos de desarrollo comunitario. El fin de semana del 22, 23 y 24 de agosto de 2014, el sueño de Adriana, su pareja y sus tres hijos de tener una casa en mejores condiciones se cumplió. “Esta es la oportunidad de aportar a la construcción no solo de viviendas, sino también de tejido social más justo, desde los conocimientos que cada uno posee”, dice Andrés Quevedo, voluntario de la organización.

Antonio Murillo, el director de la Junta Administradora Local (JAL), considera que la vereda está libre de alto riesgo, pero señala que el inconveniente de la zona es que está rodeada de nacimientos de manantiales y eso impide las construcciones.

La vivienda no es el único tema que agobia a los residentes; los servicios públicos y la seguridad son otras de las preocupaciones con las que conviven las familias. En la zona hay presencia de grupos armados ilegales que son quienes ejercen dominio y control social a la comunidad, pues hacen un cobro semanal por la provisión de agua (no potable), debido a que el único servicio público formalizado es el de fluido eléctrico.

“Arriba, allá en la JAL, cobra una muchacha; pero dizque esa agua la manejan los muchachos del barrio y si uno no alcanza a pagar, vienen y la cortan”, asegura Margarita*, vecina del sector; y añade: “No le pueden dar agua los vecinos a uno, ni nada, porque se la cortan a ellos también”.

La urgencia de compromiso

Para los habitantes de la vereda Manantiales, la situación del agua potable y el manejo de aguas negras es todo un desafío, pues sin el correcto manejo de ellas, los olores y las enfermedades prevalecerán en la zona hasta que el Municipio de Bello les proporcione una medida definitiva.

Jorge Iván Cañas, coordinador del Área Operativa de la Oficina de Gestión y Riesgos del Municipio de Bello, estima que para que los sectores de invasión sean legalizados el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) tendría que ser modificado, pero para esto primero debe pensarse en la legalización de acueducto, alcantarillado, luz eléctrica, entre otros servicios importantes que aseguren el bienestar de los habitantes.

La familia de Adriana, así como los pobladores de la vereda, esperan poder descansar en una casa segura; sin el miedo a las lluvias nocturnas o un inesperado deslizamiento. Quisieran caminar sin embarrarse los zapatos y poder tomar agua sin pensar en más procesos que abrir la llave.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente. ▲

Víctimas, las voces que no serán calladas

“Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. Artículo 12 de la Constitución Política de 1991.

Melisa Ospina Yanes
melisa.ospinaya@amigo.edu.co

Colombia, un país de profundas desigualdades y con más de medio siglo de confrontaciones armadas, busca darle una solución al conflicto mediante el actual proceso de paz que se está negociando en La Habana, Cuba, entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

Este proceso ha llegado al acuerdo de tres de los cinco puntos propuestos en la agenda a negociar, los cuales han sido: la Política de Desarrollo Agrario Integral, la Participación Política y la solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Actualmente, se encuentra en discusión en La Habana, Cuba, el tema de las víctimas, el cual ha generado un sinnúmero de polémicas por su diversidad. Según el Registro Único de Víctimas, a la fecha se contabilizan más de seis millones de víctimas que han sido objeto de desplazamientos, homicidios, desapariciones forzadas y secuestros.

Durante años, estas personas han sido condenadas al silencio, al olvido y a la impunidad. No obstante, en el 2005 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubo un primer acercamiento, a través del proceso con los paramilitares, con la Ley de Justicia y Paz 975, que tenía como fin “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Al respecto, Alejandro Sierra Urrego, defensor de Derechos Humanos y miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), afirma: “La Ley de Justicia y Paz es un retroceso para alcanzar la justicia, ley que garantizaba la impunidad, y que buscó dar más garantías a los victimarios que a las víctimas”.

Así mismo, Sierra afirma que “la ley era tan injusta” que condujo a las reacciones por parte de las víctimas y de las organizaciones que las representan,

denunciándola por ser “un monumento que garantizaba la impunidad”.

Por otro lado, Laura Ardila Jaramillo, representante judicial de las víctimas de la Ley 975 de 2005, considera que la Ley de Justicia y Paz ha sido positiva, porque se ha implementado en varias entidades para atender, orientar, acompañar y velar por las víctimas en todas las etapas de los procesos. “Considero que el acompañamiento que se realiza es acorde y cada una de las instituciones se encuentra capacitada y brinda una buena asesoría a las personas víctimas del conflicto armado”, agrega.

En el 2011 se creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 en la cual: “Se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”. Sin embargo, el Movice denuncia que esta ley se construyó sin contar con los aportes de las víctimas, y de las ONG, por lo tanto está lejos de poder garantizar y recoger las pretensiones y demandas requeridas por los afectados.

Al respecto, Ardila Jaramillo, expresa que dicha ley consagra muchas garantías para las víctimas, pero la falta de presupuesto económico, dificulta el proceso de indemnización. Ella afirma que “un aspecto fundamental en la Ley 1448 es la restitución de tierras, proceso que por los grandes índices de violencia que aún se presentan en diferentes zonas de nuestro país, no se puede hacer efectivo”.

Las voces de las víctimas

Francisco José Álvarez, una de las víctimas que ha dejado el conflicto armado colombiano, oriundo de Caicedo, Occidente antioqueño y buscador de un mejor futuro, sentó raíces en la región del Naya, territorio que se encuentra ubicado entre los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca. Es en esta región, para el año 2000, donde Álvarez es objeto de su primer desplazamiento forzado por culpa, según él, “no solo de un grupo armado, sino por todos”.

Francisco José recuerda que todo sucedió cuando fue citado junto a varios campesinos de la comunidad para reunirse con los grupos guerrilleros que operaban en la zona (Farc y Eln), llevándose a cabo en un punto llamado La Playa, allí les informaron que era necesario que apoyaran su lucha armada por la llegada de grupos paramilitares a la región.

Álvarez en ese momento llegó a la conclusión de irse porque, según él, “para pelear no servía”. Luego de su partida,

en abril del 2001, los paramilitares realizaron una masacre que costó la vida de aproximadamente cien personas, entre campesinos, afrodescendientes e indígenas, ocasionando el desplazamiento de más de mil ciudadanos.

Hoy Francisco vive en Medellín, el Estado le ha dado algunas ayudas pero no son suficientes para reparar y saldar la deuda que tiene pendiente con él. Este sobreviviente del conflicto armado se convirtió en mediador. Desde su experiencia en el Museo Casa de la Memoria, centro de encuentro para las víctimas y los victimarios, según él, se puede tejer un diálogo para decirle no a la guerra, porque su sueño es “poder ayudar a construir una Colombia mejor”.

Al igual que Francisco, Óscar Zapata también es mediador en el Museo Casa de la Memoria y víctima del desplazamiento forzado: “Yo vengo de Yarumal, Antioquia, llegué desplazado a Medellín en 1996 cuando la guerra tomó esa frialdad en todo el país”.

Zapata aún no recibe ningún beneficio por parte del Estado. Además, vive la problemática de enfrentar el desalojo, pues cuando llegó a Medellín su único refugio fue un asentamiento, lugar en el que pudo reconstruir su vida después de sufrir el flagelo del conflicto.

Al respecto, Alexander Velásquez Velásquez, encargado del análisis de la política pública local de atención a víctimas de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, comenta que diariamente a la capital antioqueña llegan aproximadamente mil víctimas, siendo esta la segunda ciudad en registrar más personas desplazadas, las cuales se ubi-

can en las periferias, lo que genera un sinnúmero de problemáticas.

Participación de las víctimas

En Colombia hay organizaciones que se encuentran trabajando por reclamar los derechos de las víctimas, y son también ellas las que luchan día a día por estar presentes no solo en la reclamación y reparación, sino también en lo que serán los procesos después del conflicto, lo que les genera algunas inquietudes, según Adriana Rodríguez, directora de Comunicaciones del Museo Casa de la Memoria: “El tema de la negociación no es solamente lo que está pasando en La Habana, sino qué sigue después. Además, la ciudad y el país, en general, no están muy preparados, ya que no existe una cultura de paz”.

Por otro lado, existen víctimas que no solo quieren verdad y reparación de parte de los grupos al margen de la ley, sino también por parte del Estado colombiano, como Fabiola Lalinde, que hace treinta años, el tres de octubre 1984, emprendió un “vía crucis” a causa de la desaparición forzada y posterior muerte de su hijo Luis Fernando a mano de las Fuerzas Militares. En 1992 doña Fabiola logró recuperar los restos mortales de su hijo, actualmente ella sigue luchando por que se haga justicia con los responsables de su sufrimiento.

Con respecto al proceso de Paz, doña Fabiola comenta que la situación no es diferente, pues no faltan los enemigos de ésta. Además, afirma que cada día mueren soldados, guerrilleros y, como siempre, gente totalmente inocente: campesinos, indígenas, afrodescendientes, líderes, defensores de Derechos Humanos. “Son asesinados a diario sin respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, que es de obligatorio cumplimiento para las partes en conflicto: respetar a la población civil”. Ella concluye que se requiere de una reflexión profunda y de un inventario de los errores cometidos en todos los procesos de paz que se han intentado en el país. ▲



Muchas víctimas buscan tanto la reparación por parte de grupos armados ilegales como del Estado. Foto: Melisa O.

Reciclando guerras con música *hip-hop*

Muchos jóvenes encuentran en la música una vía para reintegrarse en la sociedad luego de haber sido parte del conflicto. Esta es una historia de cómo a través del arte se reconstruyen vidas.

Laura Restrepo Barrera
laura.restrepoba@amigo.edu.co

Andrés Cordero, como se hace llamar para ocultar su identidad, vive en la Comuna 6-Doce de Octubre desde hace ocho años, luego de haberse retirado de las Farc. Él, con ayuda de un vecino, conformó el grupo de *hip-hop* Katarsis Klan como un nuevo proyecto de vida de no violencia.

Cordero vivía en una vereda del departamento del Cauca en una finca con sus padres campesinos, allí cosechaban frutas y verduras para luego venderlas y obtener un poco de capital. Era el mejor estudiante de su grado en el colegio, y soñaba con ser productor de música para alegrar los oídos de los demás.

Un día luego de llegar de estudiar y ponerse a trabajar con su padre, llegaron las autodefensas a su vereda por una supuesta colaboración con la guerrilla y comenzaron a matar personas. Cuando tomaron su finca, él alcanzó a esconderse rápidamente y de su familia fue el único que logró sobrevivir. Después de que pasara toda la balacera, vio a su madre con un tiro en la cabeza tirada en la cocina y a su padre en el huerto con múltiples tiros en el pecho, desde ese momento, Cordero no tuvo otra opción y se integró a las Farc con apenas doce años de edad.

Al respecto, Sebastián Tamayo, psicólogo de la Gobernación de Antioquia afirma que “el perfil del menor reclutado por

las Farc es el de un menor rural con familia muy pobre que ha sido afectada por la violencia, que registra algún nivel de desnutrición y la mayoría de las veces tiene que abandonar la escuela para trabajar”.

Ángela Garcés Montoya, docente e investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín y líder del Grupo Discurso, Organización y Política, en su texto: *Reflexiones sobre prácticas comunicativas de resistencia en la cultura hip hop de Medellín* afirma que “para los jóvenes marginados, las actividades criminales y delictivas se convirtieron en una opción atractiva de dinero fácil y prestigio entre su comunidad”.

Ella reconoce que son estos dos factores por los que los jóvenes entran fácilmente a hacer parte de problemáticas relacionadas con la guerrilla y el narcotráfico, ya que son llamativas por la necesidad de buscar la sostenibilidad.

Infancia y conflicto

Así como Cordero son más de 18 mil niños, niñas y adolescentes los que hacen parte de grupos armados ilegales, según la politóloga Natalia Springer. Así mismo, afirma que de los cinco mil menores desvinculados del conflicto entre noviembre de 1999 hasta mayo de 2013, el 60 % integraba las filas de las Farc, de este porcentaje el 28% correspondía a niñas.

Por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la defensoría

del Pueblo reconocen que los grupos armados ilegales usualmente envían a los menores reclutados a frentes que se encuentran alejados de sus lugares de origen, para que sus familias les pierdan el rastro y no tengan ningún contacto con ellos.

En el conflicto armado que vivía Cordero, todos los días eran iguales, allí sus compañeros perdían la vida por las balas de sus enemigos en cada combate. Fueron tantos los muertos que perdió la cuenta y dice que lo único que podía aliviar su aburrimiento era ese “tastaseo” de las armas enfrentándose cada día.

En uno de los tantos combates conoció a Camila “el amor de su vida” como dice él, y así mismo, combatiendo, ella se le fue. Cansado de una vida absorbida por la violencia y luego de ver cómo mataron a su novia, tomó la arriesgada decisión de retirarse del frente guerrillero al que él pertenecía.

La música: un nuevo camino

En el 2006, Cordero llegó a Medellín con la ayuda de un primo que le brindó una cómoda habitación para vivir. Comenzó a trabajar en un almacén de ropa en el centro de la ciudad por temporadas y poco a poco conoció personas que lo influenciarían a tener una nueva etapa por fuera del conflicto armado. “Pocos como yo salen con vida después de huir del monte y pocos rehacen su vida por el bien, muchos caen de nuevo y mueren por volver”, comenta Cordero.

No es un secreto que las Farc realizan juicios sumarios a quienes se arriesgan a desertar con un veredicto final como la ejecución. Sin embargo, no hay estadísticas oficiales de cuántos menores o deser-

tores mueren en manos de la guerrilla al intentar salir o escapar.

Al reinsertarse a la vida civil, Cordero conoció a Jofer, quien al poco tiempo se convirtió, según él, “en el parcerero de combates musicales”. Ellos empezaron un proyecto de música urbana para jóvenes reinsertados, el cual fue llamado Katarsis, donde enseñan los cuatro elementos del *hip-hop*: escribir e improvisar (*Mc's*); hacer los sonidos, el ritmo con la boca (*Beat*); producir música (*Dj's*) y el baile (*Break Dance*), todo esto con el fin de apartar a los niños y jóvenes de los malos hábitos delictivos.

Arte para la no violencia

Para Jofer, el proyecto ha demarcado en los jóvenes que ingresan un proceso de mejoramiento, tanto social y cultural, donde el *hip-hop* no es sólo una manera de expresar ideas, es más, es una filosofía de vida en la expresión permanente de leer el mundo, construyendo así realidades inimaginables para todos los participantes de este proyecto.

Para la docente e investigadora Ángela Garcés Montoya: “Los jóvenes que viven en barrios periféricos de Medellín crean formas de vinculación hacia agrupaciones juveniles de tipo estético

musical desde cualquier género”. Es así como ellos establecen espacios y tiempos que renuevan las imágenes del joven violento en jóvenes que se declaran al margen del conflicto armado reunidos alrededor de música urbana que proclaman y reclaman el arte como una opción de vida no violenta.

Es por eso que el *hip-hop* es una opción que se resiste a la violencia armada y transforma las adversidades presentes en el entorno de los jóvenes en Medellín, llevándolos a buscar siempre el bienestar de toda su comunidad a través de la filosofía del “hazlo tú mismo” como un estilo de vida de no violencia.

El tener en cuenta el *hip-hop* como música y expresión cultural posibilita en los jóvenes construir nuevos seres y actores responsables de cada uno, logrando así el placer psíquico y emocional, al atar el deseo de salir adelante y visibilizarse como alguien en la vida.

Actualmente, estos jóvenes que han experimentado contextos fuertes de la vida cotidiana realizan un reciclaje de todas las guerras y códigos violentos, para así hacer una re-significación a través de la creación y elaboración de líricas donde expresan su competencia creativa hacia un posible futuro en paz en la capital antioqueña. ▲



Jóvenes que han hecho parte del conflicto armado en Colombia encuentran en el *hip-hop* una manera de expresar propuestas de no violencia. Fotoilustración: Jimmy Ortiz

Doblemente afectados: violencia y negligencia

Juanes Ceballos Blandón
juanes.cebaltosbl@amigo.edu.co

En Colombia más de dos millones de niños han sido víctimas del conflicto armado y han padecido las consecuencias de masacres, secuestros, desplazamientos y desapariciones forzadas. Estos niños deben ser apoyados con programas de atención psicosocial y pedagógicos con el fin de restablecer sus derechos y asegurarles su reintegración a la sociedad.

“Los niños víctimas del conflicto tienen grandes problemas con la norma, poca satisfacción por el estudio, mal rendimiento, bajo interés por la vida; existe poca autoridad de los adultos y por eso la palabra del compañero vale más que la de los padres y la figura de autoridad no se reconoce”, así lo explica Héctor Aníbal Areiza Correa, pedagogo reeducador de la Organización Presencia Colombo Suiza, quien ha dedicado gran parte de su vida profesional a la formación de niños y jóvenes.

Esta es la principal causa por la que inician el consumo de drogas y se asocian a bandas. En el aspecto familiar han sido fuertemente afectados, porque muchos han tenido que separarse de sus padres.

Alexandra Posada Gómez, pedagoga de la Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez y víctima del conflicto armado en San Carlos, comenta que estos niños “están prevenidos, a la defensiva y pretendiendo actuar con agresión, son tímidos, evitan que los miren y les hablen”.

Es importante que hayan programas que tiendan a tratar la salud mental y psicológica de los niños para su inserción en la sociedad. “Hay muchos ciclos que se repiten y más en las regiones donde hay violencia de grupos guerrilleros o de paramilitares, hay lo que se llama reclutamiento. Muchos se adhieren a estos grupos por dinero, porque les atrae la guerra, no tuvieron otra alternativa y el estudio no tiene sentido. Con los programas de intervención se busca que asimilen un proceso, una decantación de la situación y elijan otro camino”, opina Areiza Correa.

Intervención del Estado

Granada, Oriente antioqueño, ha padecido los estragos de la guerra y el desplazamiento forzado. Según el Plan Único para la Población Víctima del Conflicto Armado, la Alcaldía, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coogranada y la Universidad de Antioquia han implementado en este municipio programas de atención psicosocial a niños y jóvenes víctimas del conflicto. El acompañamiento promueve la socialización y expresión de sus inquietudes y experiencias, procura reparar las secuelas y restablecer sus condiciones de vida.

Estos programas destacan el acompañamiento a más de 200 jóvenes y niños. Su objetivo es mejorar las condiciones de bien-

Los menores de edad víctimas del conflicto armado presentan problemas de identidad y desconfianza. También conductas infractoras y predelictivas; así mismo, aquellos, en situación de desplazamiento, sufren de depresión, se aíslan y tienen baja escolaridad.



Por medio de programas que refuerzan la identidad, se trata de evitar que los niños y niñas sean propensos a la violencia. Los esfuerzos son muchos, pero a veces no son suficientes. Foto: Juanes Ceballos

estar físico y mental. Se trabaja con eventos artísticos, deportivos y de liderazgo. Se ha invertido \$180 millones en el proceso.

La Unidad de Atención y Orientación al Desplazado (UAO), de acuerdo con su página web, atiende de 90 a 110 personas diarias en Medellín, quienes buscan información para ayuda humanitaria, trámites ante Acción Social, gestión para el ingreso de niños al sistema escolar y orientación para el acceso a los servicios de salud.

Sin embargo, es tanta la población que solicita ayuda que esta organización parece no alcanzar a brindar una atención oportuna. “Muchos amigos se la pasan metidos en la UAO, pidiendo ayuda psicológica y se demoran hasta cuatro meses para brindárselas. Si se las brindan, pero se demoran. Muchas veces cuando asignan la cita, ya la familia se cansó de ir; cambió de residencia y no la ubican. Puede que las ayudas sí estén, pero no oportunamente”, indica Alexandra Posada.

Como se menciona en el documento *Comité de justicia transicional de Antioquia,*

el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf), ha trabajado para promover y fortalecer la atención integral de los niños y adolescentes víctimas del conflicto armado. Hace énfasis en la vinculación y desvinculación a grupos armados. En esta área se ha invertido \$135 millones, cumpliendo las solicitudes de atención en un 95 %. También se centra en evitar el reclutamiento forzado, invirtiendo \$236 millones, con una cobertura de 40 municipios de Antioquia, con el fin de promover la garantía de los derechos y prevenir su vulneración.

Organizaciones no gubernamentales

No solo el Estado brinda este tipo de ayudas, existen también algunas ONG que apoyan estos proyectos como la Fundación Aliento de Vida (Funavi), organización sin ánimo de lucro que trabaja desde la parte psicosocial con los niños víctimas del conflicto armado, brindándoles un seguimiento que ayude a transformar los comportamientos y mejorar las dificultades de cada niño.

Olga Gómez, trabajadora social de Funavi, expone que la organización cuenta con veinticinco niños entre ocho y dieciséis años, desplazados por el conflicto

armado en el Bajo Cauca antioqueño, los cuales iban a ser reclutados. La fundación cuenta con dos trabajadoras sociales, una psicóloga, un grupo de practicantes de pedagogía y la directora. Allí se da el proceso de atención psicosocial, si no se supera el problema se remiten a la UAO o al Sisbén, donde los atienden neuropscólogos y neuropiquiatras.

En lo pedagógico, se trabajan programas académicos y se refuerzan conceptos en los que los niños presentan vacíos. Los recursos de alimentación son de lunes a viernes por parte del municipio de Medellín, por ser favorecidos de los comedores escolares. La alimentación de los fines de semana y festivos va por parte de la fundación. “Obtenemos subsidios de benefactores, como la sede que actualmente están remodelando para poder albergar más niños. Tenemos el apoyo de la Fundación Éxito y hacemos bingos para el sostenimiento”, agrega Olga Gómez.

Ella manifiesta que afortunadamente los resultados han sido buenos aunque: “Vemos que hay niños desmotivados o desadaptados al cambio de estar lejos de sus familias. En general, los procesos que trabajamos con ellos académicamente y psicosocialmente han sido muy buenos, reciben todo el conocimiento que transmitimos, son niños que se dejan guiar. Cumplimos los objetivos en un 80 % aproximadamente”.

Sí hay ayudas, pero no suficientes

Existen organizaciones que trabajan con estos niños, pero la cantidad de víctimas sobrepasa los recursos existentes.

La escasez de recursos es una razón por la que muchas organizaciones no pueden dar calidad a estos programas. “El Estado no desembolsa la plata en el momento indicado o la va soltando de a poquito, porque hay mucho papeleo y requisitos. Las organizaciones tienen que asumir muchas veces los costos y hay otras ONG que no arrancan esperando el desembolso. Por eso es lento el proceso de atención, el interés lo hay, pero falta la logística para que se pueda llevar a cabo”, puntualiza Areiza Correa.

Otros inconvenientes son la comunicación con otras organizaciones de víctimas y la falta de voluntad política frente al desarrollo de los proyectos.

En general, los procesos son lentos. Los niños afectados por la violencia crecen sin superar sus traumas psicológicos y vacíos pedagógicos en una sociedad que tarda en brindar apoyo y restablecer derechos.

La cantidad de víctimas es alta y las ONG no tienen la capacidad de albergar muchos niños. El Estado no da los recursos necesarios y estos menores son vulnerables a caer fácilmente en bandas delincuenciales, drogas y otras conductas delictivas, continuando así con el círculo vicioso. ▲

“Los niños víctimas del conflicto tienen grandes problemas con la norma, poca satisfacción por el estudio, mal rendimiento, bajo interés por la vida”.

La Iglesia, una víctima que se moviliza por la paz

Natalia Llanos Zapata
natalia.llanosza@amigo.edu.co

El 17 de enero de 1988, en San José del Nus, ubicado en San Roque, Nordeste antioqueño, el sacerdote Jaime Restrepo López fue asesinado en la puerta de su parroquia por orden de terratenientes paramilitares que habitaban el corregimiento. Quien fuera sacerdote y profesor de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) es considerado mártir de la Iglesia Católica por defender las causas de los campesinos ante los grupos armados ilegales, según el sacerdote Fabián Ortega Jiménez, delegado arzobispal para la Vida la Justicia y la Paz.

El delegado afirma que así como Jaime Restrepo muchos sacerdotes en su labor de evangelización son víctimas del conflicto armado y recuerda cómo a él le tocó vivirlo durante los años 1993 y 1994, al ser nombrado embajador por la paz.

Describe cómo en esa época su capilla, ubicada en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, era el centro de la trinchera entre las bandas criminales, las milicias populares y la guerrilla: "Fueron un año y ocho meses donde todos los días eran balaceras, mi vida se vio afectada y más ante una amenaza que recibí telefónicamente".

La amenaza la recibió por parte de uno de los miembros de las milicias populares al haber criticado en plena homilía el cobro de "vacunas" a los menos favorecidos: "Me acuerdo que en la llamada me dijeron: 'pirobo, cuídate que te vamos a matar' y entonces yo al otro día dije en la misa: hermanos queridos me han amenazado, necesito que me ayuden porque yo no quiero morir".

Así mismo, el cardenal Rubén Salazar Gómez en la Nonagésima Cuarta Asamblea General del Episcopado señaló que en su labor de movilización por la paz, la Iglesia Católica se ha encontrado con muchos delitos efectuados por los grupos armados y precisó que desde 1984 hasta 2013 hubo un total de 83 sacerdotes asesinados, 52 amenazados y 27 secuestrados.

Óscar Andrés Moreno Montoya, historiador y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, expone que aunque la Iglesia se muestra como una institución imparcial, se torna, por su fragilidad, en objetivo militar para los grupos armados, y añade que muchos sacerdotes se han dedicado a cuestionar las acciones de estos grupos ilegales, convirtiéndose en blanco del conflicto.

Ante los problemas que presenta la Iglesia Católica en la evangelización y la búsqueda de la paz en diferentes zonas de Colombia, la Pastoral Social ha creado

"La paz inicia cuando aprendemos a ver el otro, no como un actor del conflicto armado, sino como un ser humano". Sacerdote Juan Carlos Velásquez Rúa



La Iglesia como mediadora de la sociedad civil ante el conflicto se ha convertido en un blanco para los grupos armados ilegales. Foto: Natalia Llanos Zapata

programas de acompañamiento desde las diversas arquidiócesis del país para todos los religiosos víctimas del conflicto armado, así lo explica Magally Taborda Uribe, psicóloga de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín, quien explica que el proceso consiste en denunciar las amenazas y, con la intervención de otros sacerdotes, proceder a la intermediación ante los grupos armados ilegales.

Una presencia necesaria

El sacerdote Juan Carlos Velásquez Rúa, conocido por su misión por la paz en Medellín, afirma que en todos los procesos de paz en el mundo siempre ha estado un ente religioso y que la presencia de la Iglesia Católica es importante en la mesa de diálogos debido a que es una voz sensata frente a la paz, y expone que "cuando no hay un tercero, llamado Iglesia, sociedad civil u organizaciones, las negociaciones quedan con un hálito de duda".

Velásquez Rúa agrega que para una verdadera movilización por la paz es importante creer que sí es posible la recuperación del ser humano. Asegura que es necesaria la participación de todos los entes sociales para la reincorporación de los actores armados en la sociedad con oportunidades reales y expresa: "Cuando vivimos el proceso de reintegrados, los grupos económicos colaboraron y pagaron unas capacitaciones, pero ¿cuáles son los empleados de estos poderes económicos que pertenecieron al paramilitarismo?, ninguno".

El historiador Moreno Montoya opina que si algo sólido tiene la Iglesia Católica es su posición frente al tema de la paz, pero afirma que no la reconoce como la única institución garante de estos procesos, por ejemplo el que se lleva actualmente en La Habana. Considera que existen otras entidades que pueden otorgarle mayor legitimidad.

Resistencias a la Iglesia

Paradójicamente, quienes han causado mayor resistencia a la movilización por la paz que adelanta la Iglesia Católica son los organismos gubernamentales, así lo sostiene el presbítero Velásquez Rúa, quien manifiesta que "desde hace unos quince o veinte años hacia acá, en el imaginario colectivo de nuestros gobernantes está que la solución al conflicto es encarcelar y judicializar, ellos no creen que el otro pueda redimirse, ellos no creen que el otro pueda cambiar, además porque hay todo un aparato militar que hay que sostener y que hay que justificar. Cuando se habla de la paz hay unos actores de la guerra que están muy bien montados".

El perdón, un valor indispensable

El padre Juan Carlos narra cómo ha estado en algunos diálogos en la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí en horas de

la mañana hablando con los paramilitares: "Cuando llego todos me saludan de abrazo, efusivamente, amablemente y yo también los abrazo; me dicen llegó el padrecito de nosotros. Quiero a esta gente porque he aprendido a ver no un bandido, sino un ser humano".

Y el mismo día, en horas de la tarde, puede estar en el Patio 16 de Bellavista hablando con miembros del Eln: "También los saludo, abrazo y hablo con ellos de Camilo Torres y de la Teología de la Liberación y de otras cosas, y ellos me dicen llegó el padrecito de nosotros y yo los quiero mucho a ellos. Alguien me decía usted es un bipolar o usted es un político; y no, es porque yo no miro en el otro el juicio de valor o el juicio moral, sino que miro el ser humano. La clave cuando uno quiere ayudar, es ayudar al ser humano y no tomar partido".

Velásquez Rúa expone la importancia del perdón como principal valor en el proceso de paz; así mismo, lo declara Fabián Ortega Jiménez, quien en su misión sacerdotal está convencido de que ser embajador de la paz es poder transformar vidas, además, afirma que con las metodologías y pedagogías de la paz y el perdón lo están logrando.

Magally Taborda Uribe expone que "en Occidente no nos enseñaron a perdonar y menos en Colombia. Nosotros somos de conducta muy punitiva, si me la haces, me la pagas" y añade que el perdón no es un concepto netamente religioso. Argumenta que existen investigaciones científicas, sociológicas y psicológicas en las que se comprueba que el perdón aumenta el bienestar, mejora la calidad de vida y disminuye los niveles de ansiedad y de estrés.

Moreno Montoya describe el perdón como un perdón agenciado y dirigido desde los dogmas católicos, explica que también existen lógicas de perdón, olvido y de justicia que van por la vía de lo jurídico y que son la forma de operar del Estado colombiano.

"(...) al otro día dije en la misa: hermanos queridos me han amenazado, necesito que me ayuden porque yo no quiero morir".

Además, Moreno concluye: "Puede que yo perdone a mi victimario, pero ese victimario ante el Estado colombiano tiene que purgar una pena, entonces se enfrentan dos mundos totalmente distintos, el mundo de lo espiritual como ese que está en el interior del

ser humano y que decide perdonar y el mundo de lo temporal que dice que no perdona ciertos actos y que se debe comparecer ante la justicia y ahí es donde está el desbalance". ▲

Riesgos de la labor periodística en Antioquia

Alejandro Rincón Forero
alejandro.rinconf@amigo.edu.co

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en el departamento de Antioquia se han asesinado veintiún periodistas desde la década de 1970, tres de ellos en los últimos tres años.

La Alianza Interinstitucional Proyecto Antonio Nariño (PAN), en su informe de 2012, posiciona al departamento en el último puesto en lo que se refiere a impunidad en agresiones contra periodistas. De uno a cien, siendo este último el mejor puntaje, Antioquia obtiene una calificación de 2.2.

Según la Flip, en lo corrido del año, han amenazado de muerte a nueve periodistas. Éder Narváez Sierra, corresponsal de Teleantioquia Noticias en la región del Bajo Cauca, denuncia: "En el último mes he recibido dos amenazas vía mensajes de texto, no conozco las razones ni los responsables".

Narváez Sierra añade: "Debido al riesgo que implica tratar temas como: política, conflicto, minería, y orden público, debo autocensurarme. Lo que ocasiona que solo pueda abordar temas que no comprometan a personas o grupos que pueden posteriormente atentar contra mi vida".

Roberto Aurelio Nieto, director del periódico Región Al Día, medio de comunicación del Bajo Cauca antioqueño, manifiesta que "no se pueden denunciar los actos corruptos de los gobernantes ni las alianzas que se manejan internamente entre estos y los grupos al margen de la ley". Además, tras el asesinato de varios comunicadores de la región, teme sufrir las mismas consecuencias que sus colegas; de esta manera, no puede ejercer su labor, lo cual afecta la libertad de prensa.

Por su parte, Flavia Giuliana Daza Wandurraga, asesora de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sostiene que "debido a los hechos de los últimos meses tenemos que replantear, fundamentalmente, tanto en el Bajo Cauca como en toda Antioquia cuáles son las medidas de prevención".

Igualmente, Daza Wandurraga afirma que en conjunto la Universidad de Antioquia, la Flip y la Gobernación de Antioquia conformarán un comité para la producción de un manual de autoprotección y un plan especial de padrino, para que los medios apoyen a los periodistas en estado de amenaza.

Procesos dilatados

Éder Narváez explica: "Infortunadamente el proceso tanto de la UNP como de la

El periodismo antioqueño ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado en el país. No solo se han acallado voces; se ha cercenado la verdad.

Fiscalía es muy lento, puesto que a más de cuatro meses de haber interpuesto la denuncia no he recibido los resultados de las investigaciones, ni el resultado de la evaluación de riesgo que me realizaron". Además, se siente desprotegido y vulnerable ante cualquier situación que atente en contra de su vida, porque hasta el momento no cuenta con un esquema de seguridad.

El exfiscal delegado ante el tribunal de Bogotá y abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, Alfonso Rincón Triana, explica cómo debe proceder la Fiscalía General de la Nación ante este tipo de casos: "Este organismo tiene un tiempo determinado para identificar a los responsables de las amenazas. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), basado en los actos probatorios, determinará si son fidedignos para poder actuar".

Rincón Triana agrega que el nuevo procedimiento determina que para llevar el caso a audiencia es necesario que haya un acto probatorio contundente, de lo contrario la Fiscalía puede archivarlo hasta que surjan nuevos hechos probatorios. Además, el Estado cuenta con un tiempo máximo de 20 años para investigar y juzgar crímenes.

En Colombia, el panorama en los casos de impunidad es alarmante. Según la Flip, se han asesinado a 142 periodistas desde 1977. El 64 % de estas muertes están en la impunidad, lo que ubica al país en la octava posición en lo que se refiere a esta problemática en el mundo, según el Comité para la Protección de Periodistas.

En el departamento, muchos periodistas interesados en investigar temas como el narcotráfico, la corrupción y otras actividades delincuenciales, arriesgan su vida con el objetivo social de buscar la verdad. El decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, David Hernández García, dice que "en un Estado de derecho cuando se violan los principios de la expresión y la libertad de prensa, finalmente lo que está arriesgándose es el derecho de los ciudadanos a tomar mejores decisiones".

Hernández García añade que quienes lideran fenómenos como el narcotráfico,

el conflicto armado, la corrupción y la minería ilegal están vulnerando de diferentes maneras el derecho que tienen los corresponsales, en representación de una sociedad, a que se conozcan verdades.

Una mirada desde el arte

Luz Marina Idárraga Agudelo, artista plástica de la Universidad de Antioquia, quien centra su obra en la libertad de prensa y los medios de comunicación, plantea que "muchas veces las amenazas surgen por el malestar que le produce a un grupo social o a un grupo político la publicación de información totalmente sesgada, en ocasiones la posición misma del periodista hace que se despierten odios innecesarios". El periodista debe ser transparente y llevar a la sociedad información de calidad, además debe interpretar la realidad y el contexto, desde la perspectiva de una profesión humanista.

Las acciones contra la libertad de expresión no están ligadas solo a los grupos al margen de la ley, sino también a grupos económicos mundiales y empresas globales. Por eso, es necesario desarrollar una reflexión sobre la manera en que los ciudadanos pueden exigir a los grandes medios de comunicación mayor "ética, verdad,

respeto a una deontología que permita a los periodistas actuar en función de su conciencia y no en función de los intereses de los grupos y las empresas", como lo expone el periodista y académico Ignacio Ramonet en su libro *El quinto poder*.

Un periodismo sometido

La intensa violencia desatada en contra del periodismo por parte del narcotráfico y el paramilitarismo en la década de los ochenta y noventa repercutió en un sometimiento sistemático.

Atentados como la bomba puesta al diario El Espectador en 1989 por parte de Pablo Escobar; el asesinato de Jaime Garzón Forero, por grupos de extrema derecha; y en Antioquia el asesinato de Héctor Abad Gómez en 1987 en el centro de Medellín, por orden del paramilitar Carlos Castaño, han sido de las muertes más dolorosas, de las 142 que ha sufrido el periodismo, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPI).

Iván Guzmán López, presidente del Círculo de Periodistas de Antioquia (Cipa), concluye: "Es muy poco el esfuerzo que hace la Fiscalía por proteger a los corresponsales, por lo tanto, en Colombia la libertad de prensa se queda en el papel".

El periodismo antioqueño sufrió su más reciente golpe el pasado mes de agosto en el municipio de Tarazá, con el asesinato de Luis Carlos Cervantes, quien había recibido más de veinte amenazas, pero la UNP le quitó su esquema de seguridad porque no lo consideró necesario. ▲



Los ciudadanos son los más afectados cuando los periodistas sufren censura. Fotoilustración: Alejandro Rincón F.

Un conflicto que se traslada a las aulas de la U

Existen diferentes posturas en relación a la manera cómo se deben afrontar los problemas de violencia y seguridad en las universidades públicas.

Andrea Ochoa Restrepo
andrea.ochoare@amigo.edu.co

Muchas de las expresiones de violencia en el seno de las universidades públicas colombianas son atribuidas a la infiltración de grupos armados ilegales, lo que afecta la imagen de estas instituciones, generando estigmatización. Esto se debe, en parte, a que las medidas tomadas por el Gobierno no han sido las más eficientes frente a la problemática.

Actualmente, no hay una cifra exacta de la presencia de grupos armados en las universidades públicas: "La tasa de inclusión en las instituciones era más alta entre las décadas de 1970 y 1980. Los datos estadísticos se podían elevar al 40 % de los estudiantes pertenecientes a estos grupos", expone Gonzalo Medina Pérez, periodista y politólogo, docente de la Universidad de Antioquia (UdeA) y experto en conflicto.

Medina Pérez explica, en el caso de la UdeA, que al tratarse de una institución departamental: "Las medidas las toma el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, de tal manera que la universidad ha perdido autonomía. Una de las medidas que ha tomado el gobernador es mandar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) cuando se presentan revueltas y a veces manda policías para que hagan presencia en la UdeA".

Por su parte, el gobernador, en varias de sus intervenciones ante los medios de comunicación, ha explicado que la intervención del Esmad solo se da en casos específicos de violencia, en los que se atenta contra los bienes públicos y las personas.

Un reflejo de la sociedad

"Las universidades públicas y particulares no están exentas del conflicto, allí se reflejan todos los problemas de orden político-social. Las instituciones son una especie de territorio público donde siempre habrán grupos armados que intenten implementar ideologías", anota Soledad Betancur Betancur, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Así mismo, dice que es necesario que el Gobierno construya estrategias de cultura política y que no se combata el conflicto con más violencia.



Las universidades son instituciones de territorio público y no están exentas del conflicto y los problemas político-sociales. Fotoilustración: Jimmy Ortiz

Sin embargo, asegura Betancur: "Un debate muy grande es por qué los conflictos que se presentan se combaten con el Esmad, si hay una protesta con escaramuzas, con papas bomba, lo primero que entra es el Esmad. El Gobierno no llega con una estrategia persuasiva sino que llega con una confrontadora".

Para la investigadora: "Se deben crear estrategias como las de los integrantes de Liebre (Grupo editorial de la Universidad Nacional). Este proyecto se llamaba "Con los Capuchos", el cual consistía en invitar a los integrantes de los grupos armados a que entraran en conversación con la Universidad".

"Las universidades públicas viven una situación de violencia generalizada. Las formas violentas de relación entre grupos de izquierda se han vuelto predominantes en diferentes instalaciones de estas. Las estrategias gubernamentales han dificultado la solución a una posible negociación", opina Betancur.

Santiago Arroyave Alzate, politólogo de la Universidad Nacional, afirma que "no todas las universidades públicas tienen las mismas manifestaciones, por ejemplo, en la Universidad Nacional, con sede en Bogotá, en la del Cauca y en la de Antioquia en algunos momentos de protesta se evidencian jóvenes con camuflados, haciendo actividades alegóricas a ciertos grupos armados, principalmente a grupos como las Farc y el Eln, por lo tanto el Gobierno debe crear diferentes estrategias que se adapten a la cultura de cada universidad".

"En la Universidad Nacional se han tomado medidas como contrataciones con agencias de seguridad privada, tratando de mantener el control. Se ha invertido presupuesto y se han planteado programas que permitan soluciones (...) uno ve que en la universidad sí hay preocupación tanto del Estado como de los directivos por mantener un control, además, la universidad es el reflejo del Estado y la institucionalidad tiene dificultades para atender los problemas de inseguridad", manifiesta Arroyave Alzate.

En una entrevista publicada por UdeA Noticias, el 18 de febrero de 2013, el rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, solicita más acompañamiento de los órganos de justicia: "He puesto todo de parte mía y de la institución en denunciar y apoyar a las instituciones que les corresponde las investigaciones, la judicialización y el esclarecimiento de los hechos de violencia. Comparto que la Universidad proteste, debata, controvierta porque hace parte de su esencia (...) pero la verdad, en todos estos años no ha habido una respuesta contundente que le demuestre a todas esas personas que transgreden la norma, que son violentas, que hacen noticias estallando bombas o agrediendo personas".

Reclaman diálogos

Por su parte, Dairon*, joven que dice ser integrante del grupo M-89, del que afirma es continuación del M-19 en la UdeA, sostiene que el Gobierno no busca medidas para entablar conversación con ellos: "En primera instancia el Estado nos lleva por las malas, nunca se acerca con el diálogo, con pautas, solo quiere estigmatizar

la universidad y mostrar lo negativo de nuestro movimiento, debería pensar en una verdadera solución, no en ataques circunstanciales que solo generan perjuicios para la comunidad estudiantil que no comparte nuestras ideas".

Frente a posturas como la de Dairon, el gobernador de Antioquia, quien además es el presidente del Consejo Superior Universitario de la UdeA, ha sostenido en diferentes espacios que está abierto al diálogo y el análisis de las distintas propuestas de educación superior.

Los integrantes de estos grupos planifican constantemente cómo van a manifestarse en las instituciones. Muchos de ellos manejan las protestas de forma pacífica, mirando en qué está fallando el Estado para implementar nuevas ideologías.

"Nuestro movimiento tiene una forma de pensar y cada integrante tiene una cátedra. Se maneja una perspectiva política muy social en la que se mira en qué está fallando el Estado. Hay una tendencia muy clara de que siempre hay un gobierno sobre la universidad. Muchas veces cuando los grupos hacemos marchas en la institución no permitimos que las autoridades entren porque se ve afectada nuestra autonomía. Buscamos implementar que los estudiantes conozcan los verdaderos factores de política", expone Dairon.

No todos los apoyan

Para Melissa Benjumea Ochoa, estudiante de Ingeniería de Alimentos de la UdeA: "El Gobierno no está utilizando la forma más adecuada, está luchando con el Esmad y proporcionando más violencia. Nunca han dialogado con ellos para que de alguna forma no se sigan viendo afectadas las labores académicas. Otra medida del Estado es cerrar la universidad cuando se ven afectadas las labores administrativas".

"El Estado debe tener en cuenta que la mayor debilidad es que no todos los estudiantes de la UdeA están de acuerdo con estos grupos y no tienen una forma de llegar con sus pensamientos a todos los estudiantes, solamente una minoría de la universidad los apoya", concluye la estudiante.

Cómo afrontar la problemática es un debate que sigue vigente. Los ojos están puestos en los Diálogos de Paz que se adelantaron en La Habana, Cuba, pues de allí puede resultar una salida definitiva. ▲

(*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente.

No hay amputaciones para la esperanza

Deisy Lorena Cano Cano
deisy.canoca@amigo.edu.co

Oscar Darío Marín Aguilar dedicó gran parte de su vida al servicio militar y llegó a ser soldado profesional del Ejército Nacional de Colombia. Sin embargo, hoy es un afectado más del conflicto armado. Evoca el momento en que una mina antipersonal le arrebató una de sus piernas.

Marín Aguilar estaba en Ituango, Norte de Antioquia, patrullando un campamento junto con uno de sus compañeros cuando sufrió una lesión en la pierna izquierda. Añadió también que ese mismo día hubo un combate con el frente 18 de las Farc, quienes habían minado el territorio.

El enfrentamiento con este grupo armado duró desde las once de la mañana hasta las once y treinta de la noche. Luego de terminado, llegó la Fuerza Aérea y llevaron a los afectados al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, para que se le realizara el proceso de cirugía al militar más afectado, Marín Aguilar, y el de recuperación a su compañero de combate.

Diego Alejandro Muñoz Rincón, traumatólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, afirma que cuando hay una explosión en un combate, generalmente, no es uno solo quien sufre traumatismos, ese posiblemente sea el más afectado, pero con él llegan otros pacientes más que fueron perjudicados por el estallido. Agrega que quien sobrevive a la explosión de una mina es sometido a una o múltiples amputaciones.

Muñoz Rincón explica las medidas que se deben tomar con este tipo de pacientes: "básicamente lo que se hace es estabilizarlos, curarles las heridas, manejo del dolor y en caso de ser necesario, el traslado a cirugía".

La recuperación física es acompañada por el tratamiento psicológico al que estas personas deben someterse después de sufrir el flagelo del conflicto. Milena Patricia Hernández Domínguez, psicóloga, manifiesta que "los eventos traumáticos generan pérdidas en el ámbito físico y emocional, llevando al sujeto a un estado de congelación".

Un daño difícil de superar

La psicóloga afirma que estas personas sufren una anestesia emocional donde a causa del trauma expresan tristeza, infelicidad y llanto, estos estados de ánimo se repiten continuamente sin que cambien por un determinado tiempo.

El especialista en este tipo de traumas debe plantear unos procesos y unas ac-

Consideraciones sobre un tema que ha dejado con discapacidades físicas, según la Uariv, a más de once mil personas.



Los soldados heridos en combate por minas antipersonal son considerados víctimas, debido a que este tipo de artefactos están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario. Foto: Deisy Lorena Cano

tividades que le permitan al paciente recuperarse poco a poco. Milena Patricia, sostiene que "el poder exteriorizar dichas expresiones permite que estos uniformados intenten experimentar nuevamente un sentimiento de confianza hacia los demás, pudiendo empezar a reconstruir sus vidas más allá de la experiencia traumática y del estrés".

El sentir de estos combatientes luego de perder una de sus extremidades es algo indescriptible, según Marín Aguilar, quien detalla lo que en ese momento fue para él la amputación de una de sus piernas: "Llegué a pensar que mi vida había terminado allí porque sabía que no podría volver a realizar las labores que estaba acostumbrado a hacer. Estuve varios días sin poder asimilar lo terrible que era no tener una de mis extremidades".

El conflicto armado en Colombia, produjo según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), más de seis millones de víctimas registradas entre el año 1985 y 2013. Entre ellas, 11.623 por minas antipersonal,

150.841 por desaparición forzada, 77.965 por actos terroristas, 9.093 por torturas, entre otras. Los principales actores del conflicto armado han sido la guerrilla, el Ejército, el narcotráfico, los paramilitares y el Estado colombiano.

Alfredo Restrepo Ruíz, politólogo y docente de la Fundación Universitaria Luis Amigó, afirma que "uno de los antecedentes fundamentales del conflicto en Colombia y en general de la violencia en el país tiene que ver con el proceso de conformación de la República, cuando se establecen los Estados independientes". Manifiesta también que la división de grupos políticos, precariedades financieras y narcotráfico, han sido piezas fundamentales para que se genere el conflicto armado en Colombia.

Medidas legales

Al tema de las víctimas del conflicto, se le añade que el Estado debe cumplirles con la indemnización, y debería hacerlo con oportunidades laborales y educativas, de acuerdo con la Ley de Víctimas (Ley 1448), que es aplicable únicamente para las personas que han sido perjudicadas a causa del conflicto armado a partir del

primero de enero de 1985. Incluye la restitución de tierras y las indemnizaciones económicas.

Marín Aguilar expone: "En estos momentos no trabajo, como bien sabemos en este país es muy complicado que en una entidad le den la oportunidad a personas con discapacidades físicas". Manifiesta también que solo los institutos dedicados a acoger personas con discapacidades brindan la oportunidad de trabajar y de estudiar si así lo desean.

En lo relacionado a la indemnización, este exsoldado afirma: "A nosotros los que a causa del conflicto quedamos en situación de discapacidad, nos corresponde un porcentaje, claro, todo depende del grado de la lesión. A mí, por ejemplo, me evaluaron y con base en los resultados me otorgaron el 92 %. Mensualmente recibo \$680.000".

Acciones de apoyo

A la ley que cobija a personas con discapacidades, se suma la existencia de entidades que tienen como objetivo ayudar a estas personas. Un ejemplo de ello es la Fundación Héroe Camina, situada en Medellín. Esta institución ayuda a quienes han hecho parte de las Fuerzas Militares y han sido víctimas del conflicto armado, a que se reincorporen a la vida civil, a brindarles la oportunidad de trabajar y de adquirir estudios si así lo desean. Hasta la fecha se encuentran laborando 34 soldados en diferentes empresas de la ciudad.

Victoria Espinal Múnera, directora de programas en Héroe Camina, afirma que la entidad cuenta con varias fuentes de financiación. Las personas civiles que se reincorporan al Ejército y reciben unos cursos dictados en la Cuarta Brigada quedan registradas como reservistas y son la fuente principal de aporte, la mayoría de donaciones son en especie. El Ejército Nacional es otro medio de financiación donde todas las ayudas que brindan son en especie, y prestan servicios de hospedaje, alimentación y formación.

Cuatro programas ofrece Héroe Camina como salud, educación, vivienda, inclusión laboral y productividad. Estos beneficios son aprovechados en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Chocó.

Marín Aguilar corrió con la suerte de ser llevado a Héroe Camina: "Luego de todo esto tuve la oportunidad de ir a la Fundación, allí estuve por un año sometido a terapias tanto físicas como psicológicas, en realidad fue fundamental la ayuda que me brindaron allí y, cómo no decirlo, el apoyo de mi familia, gracias a todos ellos logré superarlo todo". ▲

“La única protección de un maestro es una tiza y un borrador”

Los maestros no escapan de las presiones del conflicto armado, ellos como única arma tienen su conocimiento, amor y ganas de enseñar.

Katty Paola Collantín Cardona
katty.collantinca@amigo.edu.co

Mariela Ruiz* es una maestra que a pesar de lo que le sucedió ejerce la docencia en la Institución Educativa Liborio Bataller, un colegio ubicado en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño.

La historia de Mariela comenzó el jueves 18 de julio de 2002 a las tres de la tarde. Descansaba en su casa luego de una larga jornada en la escuela de la vereda La Po, a ocho horas de la cabecera municipal.

Mientras descansaba, irrumpió en su casa, haciéndola saltar de la hamaca donde se encontraba acostada, el Bloque Metro, un grupo paramilitar que operó en el Nordeste antioqueño desde 1997 hasta 2003. Con arma en mano obligaron a las personas a desplazarse desde sus casas hasta el colegio, y allí permanecieron durante 24 horas.

Mariela cuenta que aunque había pasado gran parte de su vida en esta escuela, ese día tenía mucho temor, pues sentía que el techo y las tablas podridas en cualquier momento podrían venirse abajo. Pensaba en toda la población vulnerable como los niños, las jóvenes en embarazo y los ancianos.

En su paso por la vereda, los integrantes del Bloque Metro asesinaron a varias personas, entre ellas, al presidente de la Junta de Acción Comunal y a un joven cristiano. Fueron degollados y posteriormente descuartizados para ser sepultados en las fosas que el grupo paramilitar había preparado. “Este grupo solo pensaba en robar y matar, no tenían otra visión”, asegura la docente.

Al tercer día, el grupo paramilitar salió de la vereda advirtiéndole que si los abaleaban por el camino, se iban a devolver y a todos los que estuviesen ahí los matarían. Mariela recalca que eran muchas personas y que “eran como la roya, todo lo que encontraban a su paso se lo llevaban”.

Tres días después, Mariela logró llegar a Segovia con el único objetivo de hablar con el secretario de Educación, quien luego de escuchar lo que le había sucedido, respondió que lo único que podía hacer era acompañarla a hacer la denuncia como desplazada ante la Personería Municipal.

Una solución tardía

Esa problemática que afrontaba Mariela en 2002 y muchos maestros del país, tie-

ne hoy, once años después, una respuesta más formalizada y concreta. Nelson Pérez, director de la Comisión de Derecho Humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), explica que la Secretaría de Educación abrió una oficina de talentos o recursos humanos, donde orientan a los maestros amenazados.

De acuerdo con el Decreto 1442 del 31 de julio de 2014, expedido por el Ministerio de Trabajo, el docente tiene que ser reubicado en un periodo de entre tres días y un mes.

El docente será atendido durante tres meses mientras la Unidad Nacional de Protección le hace el análisis al riesgo, y eso implica hacer una investigación rápida de las circunstancias. Con esta se determina el nivel de riesgo, que puede ser ordinario, extraordinario o extremo.

Cuando la Unidad Nacional de Protección define el riesgo, la Secretaría de Educación reubica al maestro en un municipio donde pueda ejercer su profesión dignamente. Además de esto, existe otro Decreto, el 1782 del 20 de agosto de 2013, expedido por el Ministerio de Educación Nacional. Estos dos decretos cobijan en la actualidad a los maestros que son víctimas de desplazamiento forzado.

La guerra no cesa

Por su condición, Mariela fue remitida a un jardín de niños llamado Pelusas, mien-

tras llegaba el 22 de noviembre de 2002, día en que finalizaba su contrato. Un año después, cuando su vida parecía ser normal, fue trasladada a la vereda El Paso de la Mula, cerca del municipio de Remedios, Nordeste antioqueño. En esta zona operaban varios grupos guerrilleros. Cuando ella llegó se enteró por un amigo habitante del lugar que la guerrilla la había declarado objetivo militar por el solo hecho de haber estado en la vereda La Po.

Mariela regresó a Segovia en busca de una nueva ayuda por parte de la Personería, pero halló una negativa, solo le dieron una carta donde constaba que era profesora y que debía ejercer allí. De vuelta a la vereda, con papel en mano, se enteró de

que habían asesinado a su compañera de profesión Janeth López, quien fue retenida por la guerrilla para investigarla porque, según ellos, tenía vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Janeth tenía cinco hijos y una madre por quien velar, por esto rogaba que la liberaran. Los subversivos hicieron caso a sus súplicas, pero lo que Janeth no sabía es que esto era por poco tiempo.

Cuando al fin logró salir, caminó desde donde la tenían encerrada hasta la vereda El Osito, cercana a Remedios. Allí podría tomar el transporte para Segovia, pero cuando llevaba aproximadamente diez minutos caminando, le propinaron tres disparos, dos en la espalda y uno en el cráneo.

Durante los quince días de cautiverio, Janeth le envió una carta a su madre y a sus hijos donde les expresaba: “Yo salgo

de esta y nunca más nos vamos a separar, siempre vamos a estar juntos”.

Cuando llevaron su cuerpo a Segovia, los maestros y amigos lloraban al sentir la impotencia y por la falta de protección de sus vidas.

La docencia, una profesión riesgosa

Colombia tiene el deshonroso registro de ser el país del mundo, en las tres últimas décadas, donde más maestros han sido asesinados. Del 2004 al 2006 en Colombia fueron asesinados 236 maestros, según cifras reportadas al gremio, mientras en el resto del mundo fueron 162, expone Iván Rivas, presidente de la Subdirectiva de Adida, El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

Los casos son diversos, por ejemplo, en el corregimiento de Cuturú del municipio de Cauca, Bajo Cauca antioqueño, un docente del Centro Educativo fue obligado a salir de su casa por un grupo paramilitar, a los tres días lo encontraron cinco kilómetros abajo en el Río Nechí. Entre tanto, el grupo armado ordenó a los campesinos no recogerlo y a los familiares no buscarlo, porque de lo contrario otro miembro de la familia podría correr con la misma suerte.

Entre 1986 y 2011, 889 de los maestros afiliados a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) fueron asesinados, 2.733 víctimas de amenazas, 37 víctimas de atentados con o sin lesiones, 53 desaparecidos, 122 detenidos arbitrariamente, 40 secuestrados y 19 torturados, aclara Omar Arango, fiscal de Adida.

Un caso parecido le ocurrió al docente Carlos Moreno* quien por no querer transportar en su vehículo y hospedar en la casa de sus padres a miembros de grupos delincuenciales, fue amenazado y asesinado. “¡Qué pesar de mi viejo!, aunque cumplió uno de sus sueños al tener a sus siete hijos reunidos antes de su muerte, con él murió otro sueño, el de ser director de su propia escuela”, recuerda el hijo mayor de Carlos, Javier Moreno*.

Las cifras y los reportes de Fecode confirman que en Colombia ser maestro es una profesión riesgosa ya que es uno de los sectores de trabajadores que más víctimas ha tenido como consecuencias del conflicto armado.

Mariela Ruiz es una docente más que, como muchos de sus colegas, busca ser escuchada y que su vida tenga valor para el Estado, ya que, según ella, para los maestros “no hay ninguna protección, solo cuentan con una tiza, un borrador y un grupo de niños con ganas de aprender”. ▲

*Nombres cambiados por petición de las personas víctimas y familiares para proteger su identidad.



Palabras que expresan el sentir de muchos maestros en Colombia. Fotoilustración: Katty Collantín Cardona

La reparación de víctimas del conflicto: una larga espera

Kelly Tatiana Gómez Quiceno
kelly.gomezqu@amigo.edu.co

A Gudiela de Jesús Palacio, el 31 de enero de 2003, las Autodefensas del Bloque Metro le mataron a su hijo. A los dos días la llamó la Personería para tomar su declaración como víctima y ser reparada. Quedó a la espera de una respuesta. En 2008 nuevamente declaró, y es hasta 2010 que recibió una carta emitida por Acción Social que decía: "Es posible confirmar que el caso cuenta con los criterios necesarios para el reconocimiento de la calidad de víctima según el Decreto 1290 de 2008, Reparación por Vía Administrativa". Pero han transcurrido cuatro años y aún continúa esperando.

Como Gudiela, representante en la Mesa Departamental de las Víctimas de Yolombó, otras víctimas del Bloque Metro llevan más de 10 años esperando ser reconocidas. El cambio de siglo ha sido la época más difícil para los yolombinos. "Cerca de 7.000 víctimas dejó el Bloque Metro", asegura Rafael Martínez García, enlace Municipal de Víctimas.

Reparación y reconocimiento

Los campesinos se vieron obligados a desplazarse a las grandes ciudades o municipios, debido a la acción violenta de grupos armados al margen de la ley. A Mario Hernández Chaverra en 2001 los paramilitares le exigieron dinero y lo amenazaron con acabar con su hogar si no lo daba. "Tan pronto me dijeron eso, salí corriendo, yo vivía en la vereda La Carolina, tenía animales, cultivos y todo se perdió". No ha retornado a su finca. Fue reconocido hace un año como vícti-

Entre 1998 y 2003 en Yolombó, Nordeste antioqueño, el Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) cometieron asesinatos selectivos y desplazaron a los pobladores de sus tierras. "Fueron más de 800 desplazados sin contar a quienes se fueron y nunca más regresaron a declarar su situación de víctima", afirma Doris Acevedo, funcionaria de la Personería de Yolombó.

ma por La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), pero hasta el momento solo ha recibido un subsidio de \$850.000, cuando debería recibir cada tres meses esta suma.

La situación de Florany Alzate es diferente, ella no declaró ante la Personería ni tampoco frente a la Uariv. "Decidí volver, porque acá tengo toda mi familia, pero nunca he hecho mi declaración como víctima del desplazamiento, además aquí brindan mucha ayuda con el programa Viviendas en Acción. Así construí mi hogar". En el municipio hay personas que no declararon, algunas por miedo, otras porque tenían una vida digna, o bien, porque desconocen sus derechos: "No sabía que existían estas ayudas, hasta que un vecino me lo comunicó", afirma Mario Hernández Chaverra.

Un crimen infame

El 26 de enero del 2000, Jhon Arias Rúa perdió a su padre Jesús Arias Castaño, a manos de los paramilitares. "Mi papá era conductor, ese día salió a eso de las tres

de la mañana con un viaje hacia Medellín, cuando llegó a La Partida presencié un atraco que miembros del Bloque Metro estaban realizando. Ese fue su único error, lo mataron sin razón".

Hace dos años la familia Arias Rúa presentó ante la Uariv el acta de defunción y la declaración, porque en el año 2000, cuando fueron afectados, desconocían que podían ser reconocidos como víctimas. Hoy sus derechos no han sido restablecidos.

La Uariv tiene tres meses para contestar las solicitudes de las víctimas. Sin embargo, "a veces las personas no reclaman sus respuestas o muchas veces pasan tres meses y no las hemos llamado, en este caso deben elaborar un recurso de reposición", explica Janice Cardona, orientadora de la Uariv.

Marcados por el Bloque Metro

A media hora del casco urbano, por carretera destapada, hay un sitio que no parece haber sido escenario de guerra, pero fue marcado por la crudeza de la violencia: "Recuerdo un día que los paramilitares nos hicieron tirar al piso a mujeres y hombres. Rayaron las paredes del negocio, ¡fue horrible!, estaban en busca de un comerciante, pero él nada que llegaba", relata Eliza Arias Castaño, habitante del corregimiento El Rubí.

Eliza recuerda el dolor, los rostros de los asesinados injustamente, el camino donde fueron enterrados, pero hoy el panorama es otro: "Salimos sin temor, sin miedo", concluye.

Víctimas no reconocidas

La Uariv en primera instancia escucha la declaración de la víctima, luego pasa a estudiar el caso. "Para uno la persona que está al frente es víctima", aclara la orientadora de la Uariv; además, dice que uno de los motivos para no ser incluidos es porque las declaraciones no concuerdan con la fecha en la que hicieron presencia en el lugar los actores ilegales.

La Personería de Yolombó ofrece apoyo a las víctimas no reconocidas con el fin de que sean incluidas y reparadas: "Les hacemos un Recurso de Reposición, si lo vuelven a negar ya les hacemos una Acción de Tutela, ya si la niegan, hasta ahí llegamos nosotros", argumenta Doris Acevedo, funcionaria de la Personería.

Yolombó, un municipio nuevo

Hoy los habitantes de Yolombó salen tranquilos a disfrutar en familia. Víctimas como Mario Alberto Chaverra manifiestan estar agradecidos con la Administración Municipal por el cambio y las ayudas que brinda. En este año fueron entregadas 100 viviendas, 76 para la comunidad en general y 24 para víctimas del conflicto. Según el alcalde encargado Pablo Vásquez Arboleda: "en 2009 se logró con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incorder) la adquisición de un predio para doce familias, una finca cercana con todas las condiciones. Ya hace 20 días se socializó para empezar la construcción y

"Eliza recuerda el dolor, los rostros de los asesinados injustamente, el camino donde fueron enterrados".

restablecerle todos los derechos a las víctimas".

En cuanto a la seguridad, el comandante de la Policía de Yolombó, William Hernández

Ciro, asegura que hoy todo está más tranquilo gracias al Plan Cuadrante, con el cual tienen un acercamiento con la comunidad indagando si han visto personas desconocidas; además, asegura que "en el año se han realizado tres capturas a miembros de las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim)". Gracias al esquema de seguridad no se han presentado hechos con gran relevancia.

Pero la tranquilidad no es completa, pues hace mes y medio integrantes de la Mesa Departamental de las Víctimas, han sido amenazados: "Mandaron un papel con los nombres de ocho de mis compañeros, diciendo que se tenían que ir", denuncia Gudiela Palacio.

Sin olvido, pero sin rencor

El 18 de noviembre es el Día de las Víctimas en Yolombó. La Alcaldía realizó un mural con la frase: "Si mi corazón no olvida que tampoco sienta rencor". Según Rafael Martínez García. "Este día se creó con el fin de que las víctimas se sientan acompañadas".

Actualmente, muchas víctimas siguen a la espera de ser incluidas en la reparación económica, pero esto muchas veces no es lo más importante para ellas, como afirma Gudiela de Jesús Palacio: "Mi hijo no valía plata, yo solo quiero saber la verdad del porqué me lo mataron". ▲



Jhon Edison Arias Rúa visita la tumba de su padre, víctima del Bloque Metro en el año 2000. Foto: Tatiana Gómez Quiceno

Pétalos y goles que sanan heridas en La Sierra

La participación de desmovilizados en la sociedad es posible en cuanto, a partir de su compromiso y la inclusión social, encuentren oportunidades.

María Isabel Sánchez Piedrahíta
maria.sanchezpi@amigo.edu.co

Carlos Aguirre*, un joven desmovilizado del Bloque Metro, restaura el daño que generó en el barrio La Sierra de la Comuna 8-Villa Hermosa de Medellín a partir de acciones que llegan a muchos habitantes de esa comunidad.

El líder comunitario cree en el perdón para la sanación de las heridas de un barrio donde el conflicto fue protagonista por muchos años. Por ello, Aguirre reunió a madres que perdieron a sus hijos a raíz del conflicto, y, a pesar de recordarles un dolor de hace años, les ofreció una rosa a cambio de su perdón, como símbolo de arrepentimiento, reconciliación y compromiso con la comunidad.

Carlos llevaba una vida tranquila, le gustaba estudiar y soñaba con algún día ser futbolista; sin embargo, la lucha incesante que se acentuaba en el barrio lo llevó a cambiar sus guayos por las armas.

El joven Aguirre transitaba diariamente por las calles estrechas e inclinadas como único camino del barrio, pero de tanto pasar por allí, lo tacharon de "sapito" e incluso casi lo matan. "Yo me les volé, después los muchachos de alguna forma me influenciaron y, finalmente, estuve nueve años en el conflicto", señala Carlos.

De acuerdo con el artículo *Conflictividades urbanas vs. "guerra" urbana: otra "clave" para leer el conflicto en Medellín*, presentado por integrantes del grupo de investigación Cultura, Violencia y Territorio del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia (Iner), en el barrio La Sierra se evidenció la participación de jóvenes que por iniciativa propia "pretendían actuar como grupos de autodefensa barrial que se movían en la misma dinámica de las bandas".

Después, esas bandas y milicias que actuaban en La Sierra fueron poco a poco cooptadas por el Bloque Metro, grupo paramilitar cuya misión era desarrollar labores de contrainsurgencia. Según los habitantes del sector, esto ocurrió a finales de 1999.

Eran en su mayoría jóvenes que, al igual que Carlos, buscaban tal vez un poco de seguridad; sin embargo, el dinero y el poder les mostraron cómo vivir en un barrio donde el miedo, la pobreza y la inseguridad se apoderaban de sus habitantes. Según un informe presentado por el programa Paz y Reconciliación de

la Alcaldía de Medellín, las principales causas de ingreso a grupos armados se dan por venganzas personales, amenazas contra la vida, necesidades económicas y dificultades familiares.

"La verdad es que Carlos parecía bobito, le decían hasta el 'nerd', pero ya después se volvió bastante malo. Él no se metía con nadie, pero tampoco le gustaba que se metieran con él, así que mataba a la persona", dice Felipe Smit Sierra, un joven del barrio que conoce a Carlos desde los 17 años de edad.

Una mano para el cambio

Carlos recuerda que promovía el conflicto en el grupo armado y que en medio de lo que ellos llamaban "acuerdos de paz", tiraban "petarditos" hacia el otro lado de la frontera invisible. Con el tiempo el joven reinsertado descubrió que a pesar del poder, el dinero y las mujeres, algo le faltaba: "Ya uno ni le sacaba gusto a dar bala y me di cuenta que mi vida y mi familia estaban en desorden".

El apoyo de Juan Esteban Orrego Zuluaga, integrante de Comunidad Cristiana de Fe, fue pieza clave en el proceso de desmovilización de Carlos. "Yo conocí a Carlos enguayabado con una cerveza y un cigarrillo, él había intentado suicidarse en varias ocasiones y yo iba cada ocho días al barrio para apoyarlo. Ahí fue cuando empezó con esa dualidad en si seguía o empezaba otra vida".

El 25 de noviembre de 2003, Carlos se desmovilizó junto con los del Cacique Nutibara y adquirió compromisos con la justicia. Según él, han consistido en la realización de estudios, la asistencia a talleres y la comprobación de una verdadera reinsertación. De acuerdo con lo anterior, al tipo de delitos cometidos y a la contribución con la verdad, la ley actuaría.

Sin embargo, para Juan Esteban Orrego el proceso de reinsertación de Carlos fue largo y difícil, pues dice que "Carlos era un homicida que tenía problemas con el alcohol, era depresivo, y en el barrio ya lo trataban hasta de bobito, pero a pesar de todo, tuvo fuerza para salir adelante".

William Fredy Pérez Toro, docente investigador del grupo Hegemonía, Guerra y Conflicto de la Universidad de Antioquia y director de la Línea de Seguridad, Violencia, Conflicto y Política, explica que de acuerdo con la historia



Con una rosa, Carlos Aguirre pidió perdón a madres víctimas del conflicto. Fotoilustración: Elvis Paternina

del país el desmovilizado es un sujeto que carga con el estigma del guerrero. Expresa que "aquí decir estigma de guerrero quiere decir estigma de bandido", y señala además que "una persona más fácilmente aplica violencia cuando está en una montonera de fuerza, porque cuando uno está solo normalmente es incapaz de causarle dolor a otro".

Por su parte, el director de la Corporación Región, Max Yuri Gil Ramírez, experto en temas de paz expone que el porcentaje de reincidencia criminal de desmovilizados a nivel mundial es del 65 %, y afirma que "es más fácil dejar de consumir drogas". Al respecto, menciona que la reincidencia criminal se puede prevenir en cuanto "el desmovilizado encuentre anclajes familiares, laborales, afectivos, sociales y políticos, porque si está en el aire cualquier ejército lo puede acoger".

Las dificultades de reiniciar

Para Carlos era difícil enfrentarse al trabajo.

Desde muy joven inició su vida en el conflicto y no contaba con una experiencia laboral, además, era asumir órdenes que según él no había recibido antes; sin embargo, lo que le asustaba realmente, era no encontrar algo que llenara su corazón.

Surge entonces la propuesta de dirigir una escuela de fútbol en el barrio. Aunque en La Sierra veían a Carlos como el "pastorcito mentiroso", según recuerda Felipe Smit, muchos otros lo apoyaron con dicho proyecto.

"Yo siempre he contado con el don del liderazgo, antes lo usé a favor del mal, pero por esos días en que decidí desmovilizarme me di cuenta que definitivamente yo debía servir con liderazgo a los demás", dice Carlos sintiéndose seguro de su labor en el barrio.

De acuerdo con una entrevista semiestructurada realizada por SEXTANTE a diez ciudadanos con el fin de conocer su visión frente a la reintegración social de un desmovilizado, el 40 % cree que tal vez sea posible que un desmovilizado logre contribuir con la seguridad, mientras que el 60 % de las personas consultadas consideran que los desmovilizados son más propensos a delinquir.

Es el caso de Catalina Zapata Álvarez, estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Antioquia, quien considera que "solo se reincorporan para hacer daño desde otro ámbito". Por su parte, Juan José Jiménez Mendoza, estudiante de Politología de la misma universidad dice que a la sociedad le hace falta una visión progresista e inclusiva. "Un desmovilizado fue actor clave en la violencia, pero puede serlo en la construcción de la paz. Sin prejuicios, Colombia sería un país que aprende del pasado para corregir el futuro", expresa Jiménez Mendoza.

Acoger a 90 niños en un proyecto, que Carlos reconoce como una escuela para la vida, es la manera como este joven desmovilizado pide perdón: "Quiero enseñarles a los niños a que mantengan una buena relación con su familia y a que encuentren paz interior. Además, busco orientar y acompañar a jóvenes que están en malos pasos a partir de mi experiencia".

Finalmente, Carlos respira hondo y expresa con una voz alentadora: "Yo estoy todavía esperando a que el juez decida si me da casa por cárcel. Quiero restaurar todo lo que dañé en un tiempo, padres muertos, madres dolidas, familias destruidas, hijos ofendidos, mucha sangre derramada". Carlos espera que haya perdón, pues señala que solo así no habrá violencia ni venganza que alimenten el conflicto. ▲

(* A petición de la fuente, no se nombra el verdadero apellido por motivos de seguridad.

Caminos difíciles de afrontar

Ser víctima del conflicto armado es vivir recordando la ausencia de aquellos arrebatados por la violencia. Escoger el sendero del perdón o el rencor solo se divide por una delgada línea. Surge la pregunta: ¿se continúa por el laberinto sin salida de la guerra o se culmina el odio para dar paso al perdón y a la paz?

María Camila Henao Serna
maria.henaose@amigo.edu.co

Alexánder Betancur Martínez, un joven de quince años de edad, vivió momentos difíciles por la muerte de su hermano mayor, víctima de las Autodefensas Unidas de Colombia que comandaban en su barrio. Afirma que ha sido la experiencia más triste que ha tenido que afrontar en su vida. Al ver a su madre llorar sin consuelo, sus hermanos y él, impacientes por una solución al dolor, tuvieron en sus manos la decisión de perdonar o seguir en pro de una guerra que no tiene fin.

“Con mis otros dos hermanos pensamos en hacer cosas, pero era por el dolor que sentíamos en esos momentos, no era fácil ver a mi mamá llorando la pérdida de su hijo mayor, y nosotros quedarnos quietos sin hacer nada; sin embargo, quedarnos así fue la mejor decisión, porque si hubiéramos hecho algo en contra de aquellos, ya al día de hoy posiblemente fueran más los muertos por parte de mi familia, pues el mal no se detendría ahí, seguiría y eso es lo que debemos romper”.

Hoy Alexánder es una persona que no guarda rencor alguno, aunque muchas veces lo llegó a sentir. Él se muestra calmado y siempre dispuesto a ayudar a los

demás. Cuenta con nostalgia este triste acontecimiento, pero tomó la iniciativa de darle un fin al dolor, comenzar a ser un hombre que perdonó y convertirse en un ejemplo para aquellas personas víctimas del conflicto armado que lamentablemente escogieron continuar aportando dolor.

Para la orientadora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, Katherine Jaramillo Carazo, las víctimas son una población muy golpeada y, por ende, difícil de atender ya que han afrontado situaciones dolorosas y traumáticas, el salir huyendo y dejar a un lado la vida del campo, reintegrarse a un nuevo espacio totalmente desconocido. Es una labor que requiere constancia y paciencia, afirma; igualmente, que sanar las heridas requiere de tiempo y se debe permitir entrar el cambio en el corazón, lo cual es una tarea que no todos logran cumplir.

El director territorial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Antioquia (Uariv), Jorge Mario Alzate Maldonado, apunta que es importante tener en cuenta que tanto

“(...) si hubiéramos hecho algo en contra de aquellos, ya al día de hoy posiblemente fueran más los muertos por parte de mi familia, (...)”.

victimarios como víctimas son más que todo seres humanos, que hacen parte de una sociedad y que son partícipes de este conflicto por diferentes razones. Los primeros por actuar por falta de oportunidades, asumir una infancia complicada, vivir en un entorno social deplorable, carencia de recursos, entre muchas otras. En el caso de las víctimas: “No hubo garantías suficientes del Estado para protegerlos de estas personas o de las afectaciones del conflicto”, expone Alzate Maldonado.

Al comprender el contexto tanto de víctimas como de victimarios, se entiende que, de alguna manera, ambas son poblaciones marginadas y que cuentan con derechos como personas.

Alzate Maldonado explica: “El Gobierno colombiano tiene una legislación tanto para reintegrados, desmovilizados, como para víctimas. En el sentido de que el Estado tiene la obligación de atenderlos. Si un victimario deja las armas tiene ese derecho a acceder a programas que lo reintegren a la sociedad. En el caso de las víctimas, tienen unos derechos que fueron vulnerados y por ello dichos derechos deben ser restablecidos y ellas reparadas; así mismo, garantizarles el acceso a la verdad y a la justicia”.

Justicia transicional

El Centro Internacional para la Justicia Transicional la define como el proceso de reparación por las violaciones masivas de los Derechos Humanos. Se encarga de tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, proporcionándoles el reconocimiento de sus derechos, fomentando la confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho.

Las víctimas tienen el derecho, oficialmente reconocido, a ver judicializados a los victimarios, a conocer la verdad de los hechos y a recibir reparaciones. Las violaciones de los derechos no solo afectan a la víctima, sino al conjunto de la sociedad. Además, el Estado debe cumplir con esos compromisos, asegurándose de que las violaciones no vuelvan a suceder, y, en consecuencia, debe reformar las instituciones que estuvieron implicadas en esos hechos o fueron incapaces de impedirlos.

La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, según John Jairo Rincón García, de la Corporación Centro de Pensamiento Latinoamericano, consiste en diferentes procesos o mecanismos judiciales y extrajudiciales a partir de los cuales la sociedad busca que los responsables de

los hechos de violación considerados en la Ley, rindan cuenta de sus actos, se satisfagan derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas.

Alzate Maldonado enfatiza que es importante que se repare a las víctimas y sobre todo que no haya más impunidad, ya que la justicia y la verdad son fundamentales para dicha reparación. Lo que se reclama es la efectividad para sus casos, que exista una recuperación psicosocial de la víctima en todos los sentidos.

“Cuando las víctimas se encuentran con los victimarios y se dan un abrazo para sellar ese dolor que existía, es un momento muy gratificante para nosotros que nos esforzamos por un país mejor y por que esto sea un paso más a la Colombia que queremos para nuestras próximas generaciones y que en el pasado quede el sufrimiento, la barbarie y los malos ratos”, manifiesta el director territorial de la Uariv.

Oportunidades para el cambio

Óscar Arbeláez, alias “el Gato”, desmovilizado de un grupo armado ilegal que operó en la zona del Occidente de Antioquia, afirma que hoy se arrepiente por los hechos violentos que cometió. Relata que atravesó una infancia complicada, de pobreza extrema, falta de oportunidades y fue víctima del conflicto armado en su pueblo, lo cual lo impulsó a actuar sin pensar que, en un futuro, debía enseñarle a su hijo el valor del perdón y el respeto a sus prójimos: “En este momento quiero paz y quiero vivir una vida tranquila sin tener altercados con el pasado”, dice con seguridad y convencimiento.

Agrega que gracias a las ayudas y oportunidades decidió reintegrarse a la vida civil. Asegura que “si todos los auxilios que promete el Estado fueran garantizados en su totalidad, muchas más personas harían parte del cambio”.

Colombia ha sido catalogada, a lo largo de los años, como un país que carga acontecimientos violentos. Guarda consigo el dolor de miles de personas que a diario se enfrentan a continuar su vida con cabeza en alto luego de atravesar la amargura y el dolor. Hay otras miles que viven con un cargo de conciencia que no les permite vivir en paz y que los lleva a tomar un rumbo diferente para poder seguir en pie, es donde las personas que son víctimas o victimarios del conflicto armado, siguen en pro de la guerra, odiando y llenando su corazón de dolor, mientras que otros luchan por el cambio, una mejor vida dejando a un lado la sed de venganza. Recuerdan que sí se puede tener una Colombia sin guerra, sin dolor y con perdón, sentimiento que tanta falta hace para iniciar este largo camino de cambio y reconciliación. ▲



Las expresiones que hacen memoria de las personas víctimas del conflicto armado son una obligación del Estado. Foto: María Camila Henao Serna

Retornar no siempre es volver

San Carlos es el municipio del Oriente antioqueño con más retornos. La cifra aproximada es de 13.320 personas, seguido de San Francisco con 10.487, mientras que Alejandría es el de menor retornos con 982, según datos de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Juliana Jana Ospina Gómez
Juliana.ospinago@amigo.edu.co

Las personas que han sido desplazadas por el conflicto armado en el Oriente antioqueño tienen dos opciones cuando deciden retornar a los municipios: una es por medio del acompañamiento que brinda la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), y la otra es con sus propios recursos. Según el director Territorial en Antioquia de la Unidad de Víctimas, Jorge Mario Alzate Maldonado, son 24.313 hogares los que han regresado o se han reubicado en la subregión a través de la entidad.

“Todo fue de cuenta mía para volver acá”, asegura Amparo del Carmen Zapata, quien volvió a San Carlos hace cinco años, luego de movilizarse a más de cinco lugares desde enero de 1987 junto a su esposo y seis hijos, huyendo de los grupos armados ilegales, los mismos que, según testimonios de vecinos, asesinaron a tres de sus cinco hermanos.

Ella afirma que las ayudas humanitarias brindadas por la Uariv al regresar no llegaron en el tiempo que era: “A veces me llega cada año; cada tres meses, le deberían de llegar a uno y eso nunca llega. Uno tiene que poner tutela”.

Un concepto diferente tiene Néstor Giraldo Rendón, quien considera que

las ayudas brindadas por la Unidad de Víctimas han sido efectivas, incluso después de retornar: “Sí, todavía recibo ayudas económicas”, aclara el hombre, a pesar de haber regresado a San Carlos por cuenta propia, debido a que el acompañamiento por medio de la Uariv tardaba dos meses.

Nora Marín Calderón tuvo que desplazarse en el 2002 de la vereda Santa Ana del municipio de Concepción a la cabecera urbana, debido a la muerte de su esposo y su hijo a manos de grupos armados ilegales. Actualmente, vive con su hija, hace parte de un grupo de mujeres que se dedican a procesar la guayaba y está registrada como víctima en la Uariv, ella afirma: “No son suficientes las ayudas, pero nos colaboran”.

Desconocimiento de los procesos

La directora de la Unidad Coordinadora de Atención y Orientación a la Población Víctima del Conflicto Armado (Ucav), Patricia Arroyave Betancur, explica que las personas que no han recibido ayuda por parte de la Uariv, es porque no han seguido el proceso regular que es dirigirse primero a la Unidad de Víctimas, registrarse y esperar para regresar por medio de la entidad; incluso la personera de San Carlos, Marly Rodríguez Yepes, señala que “muchas veces las personas vienen de Medellín sin re-

tornar a preguntar cómo es el regreso, nosotros les decimos no se vayan a venir sin que la Unidad les autorice el retorno. Si ellos tienen paciencia esperan y si no, se vienen”.

Hay casos de familias que deciden retornar con sus propios recursos económicos. En ocasiones, porque la situación para conseguir trabajo en donde están ubicados es muy complicada, tal como manifiesta Néstor Giraldo. Otras veces, porque desean estar en su pueblo: “Del que nunca debimos salir”, expresa Amparo Zapata. Incluso hay quienes no conocen los beneficios que brinda la Uariv como es el caso de Luz Alba González, quien hace tres años regresó a San Carlos y dijo que no tenía conocimiento de qué era la Unidad de Víctimas.

“Eso es más bien por desconocimiento”, fueron las palabras del personero del municipio de Concepción, Harold García Alzate, quien aclaró que en la localidad las víctimas regresan sin un previo acompañamiento por parte de la Uariv, porque no conocen acerca de la entidad.

Concepción, San Carlos y Alejandría son tres municipios de la subregión que tienen secuelas de la guerra provocada tanto por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) e incluso por la indiferencia del Estado, coinciden los actuales gobernantes de las localidades mencionadas.

En Concepción, a partir de 2006, sus habitantes comenzaron a retornar, luego de la violencia sucedida en 1999, que afectó a los 7.000 habitantes de la época, cuando según el actual alcalde, Gustavo López Orrego: “La guerrilla se paseaba como Pedro por su casa” y no había autoridad, porque la Policía se la pasaba escondida y no había presencia del Ejército”. Hacia el 2003 los paramilitares asesinaron a varios pobladores, aduciendo que eran colaboradores de la guerrilla, esto llevó al desplazamiento de más de 3.000 personas, según el funcionario público.

Por otro lado, San Carlos es una de las localidades donde más habitantes han retornado, como señala su alcaldesa, María Patricia Giraldo Ramírez, luego de que el 80 % de la población tuvo que desplazarse a otros lugares en 1999 por hostigamientos de grupos armados ilegales. Ella expresa que “en el 2007 se declara emergencia por retorno y en el año 2009 se firmó una alianza con la Alcaldía de Medellín, atendiendo a unas 300 familias desplazadas que llegaron a la ciudad. Con ese retorno empezaron otras instituciones a atender al municipio”.

Por el contrario, el municipio donde menos población ha retornado es Alejandría, con una cifra de 982 personas, según datos de la base que maneja la Uariv. Debido al desplazamiento forzado, en el 2002 pasarían de ser 6.700 habitantes a 2.500, señala la secretaria de Gobierno del municipio, Nubia Piedad Vallejo Giraldo, para un informe realizado por el periódico El Tiempo, el año pasado.

A partir del 2011 se crea la Ley 1448 de Víctimas, la cual explica el abogado David Fernández Muñoz: “Tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas que beneficien a los afectados por el conflicto armado”.

Gradualidad del retorno

Entre las quejas frecuentes que escucha la personera de San Carlos, por parte de las víctimas retornadas están: “Que les dijeron que retornaran y no tienen qué darles, que les iban a entregar un proyecto productivo y ha pasado tanto tiempo y no ha sido tan efectivo, que solamente le ayudaron con el tema de trasteo”; ella indica que las dificultades se presentan debido a que desde la Unidad de Víctimas no hay un protocolo claro.

Para el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Carlos Iván Lopera Lopera, el Estado ha avanzado en una política del entorno que hay que ajustar en algunas cosas: “Hay que lograr que estas acciones sean más simultáneas en el tiempo”.

Con respecto al tema, el director Territorial en Antioquia de la Unidad de Víctimas manifiesta: “Existen inconformidades ya que los principios de gradualidad y progresividad no están introyectados en la comunidad, además la demanda es mayor a la capacidad institucional, lo cual hace que los procesos de restablecimiento se den a mediano y largo plazo”.

Frente a los puntos de vista expuestos, Katerine Jaramillo Carazo, orientadora de la Uariv, explica que los tres conceptos básicos para que los retornos de las víctimas del conflicto armado sean exitosos son: voluntariedad, seguridad y dignidad. Ella concluye: “Durante una solicitud en retorno y reubicación, se evalúa: que las personas realmente quieran volver a ese lugar, la no presencia de actores armados y que sus derechos no sean vulnerados”. ▲

“(…) nosotros les decimos no se vayan a venir sin que la Unidad les autorice el retorno. Si ellos tienen paciencia esperan y si no, se vienen”.



Jesús Giraldo es uno de los habitantes que retornaron a San Carlos, su pueblo natal. Foto: Juliana Ospina

Un paso que requiere el cambio de todos

Manuela Villar Londoño
manuela.villar@amigo.edu.co

En los últimos años, las personas que forman parte de los grupos al margen de la ley en Colombia han encontrado en la reinserción la posibilidad de dejar las armas y buscar nuevas oportunidades sin generar conflicto.

Para Carlos Mario Guevara Múnera, historiador especializado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional: "Los procesos de reinserción pueden estar muy estructurados desde la parte de los códigos, la reglamentación y la normatividad, pero requieren un componente sociológico, en el cual, esas conductas sean abandonadas en un sentido total".

Es importante en este sentido, para Guevara, hacer una especie de diferenciación entre quienes están alzados en armas: por un lado, encontramos a las personas que por voluntad propia ingresan al conflicto, y por el otro, aquellas que son forzadas a portar un fusil, denominado reclutamiento de menores, como es el caso de Alfredo*, quien hace parte del grupo de personas que han optado por la reinserción.

Cuando tenía 17 años, a su vereda, ubicada en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño, llegaron los paramilitares y su padre fue asesinado. Posterior a ello, el frente 5 de las Farc se instaló cerca de su vivienda en busca de menores y reclutaron a cientos de jóvenes, incluyéndolo a él.

Una mirada al pasado

Es primordial, entonces, para entender la situación de las personas que hacen parte de este conflicto armado, devolverse un poco en la historia y de forma rápida hacer un repaso.

En 1948 se produce un enfrentamiento abierto con unos fines muy definidos desde el ámbito político, un interés por el poder, y una respuesta por parte del presidente de turno, Mariano Ospina Pérez, totalmente violenta.

Para ese momento, según Guevara, se produce un quiebre en torno a que muchas personas dejan de creer en el Gobierno, sea este del bando conservador o liberal, pues consideran que hay que enfrentarlo, bajo una denominación de bandolerismo.

Carlos Mario Guevara creería que el concepto de reinserción comienza con Belisario Betancur, en su discurso de las causas objetivas de la violencia.

Hay que entender ahora un proceso que ha venido a lo largo de la historia: las amnistías, las cuales, para Guevara, han estado presentes desde el siglo XIX.

Las amnistías han sido el intento por una reinserción pero según Guevara: "Han carecido de una concepción

Aunque la reinserción ha sido la solución más frecuentada para salir del conflicto armado, la posibilidad de reiniciar una vida y dejar atrás las armas se ve envuelta en el escepticismo.



Después de recorrer los caminos de la guerra, Alfredo busca nuevos horizontes. Foto: Cristian Ramírez

realmente política, convirtiéndose en un fenómeno más de códigos, en el sentido de que muchas de las personas que se han amnistiado no han dejado esa tendencia hacia la subversión".

Asimismo, para el especialista, la reinserción puede darse como una opción para las personas que han sido forzadas a formar parte del conflicto armado y no tanto para aquellas que, por voluntad propia, han decidido ingresar a ese mundo con la ilusión de conseguir dinero y lujos fáciles.

Camino por recorrer

Es pertinente, entonces, observar la reinserción desde la disciplina que estudia los procesos mentales de las personas, teniendo en cuenta las dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales.

La psicóloga Mónica Yaneth Arenas Correa argumenta que es posible que estas personas reconstruyan su vida, siempre y cuando, cuenten con un apoyo familiar, social y del Estado.

No obstante, en esta instancia, entra en juego la desconfianza por parte de la sociedad hacia los reinsertados. La psicóloga argumenta que "si bien podemos decir que no es difícil entablar algún tipo de acercamiento con este tipo de personas, no es secreto que el colombiano no olvida, por lo tanto no perdona".

Añade Arenas Correa que estas personas casi nunca están preparadas para salir del conflicto armado, debido a que,

en su gran mayoría, son personas con poca instrucción y, además, le temen a enfrentarse al mundo social. "Es casi imposible desligar el buen comportamiento y arrepentimiento de ahora con el pasado errado", sostiene.

Desde la perspectiva de la psicóloga "se le debe preparar a estas personas para la recuperación social por medio de actividades culturales, deportivas, entre otras, para que visualicen un mejor estilo de vida y estén preparados para afrontarla".

Después de quince años de formar parte del grupo armado y ver que sus compañeros estaban dejando las armas, Alfredo a la edad de 33 años, optó por la misma decisión y se dirigió a buscar a su familia.

Tiempo después, ingresó a una institución donde lo ayudaron a terminar sus estudios de bachiller y gracias a la intervención social brindada por dicha institución, entendió que: "Esta guerra no tiene sentido alguno, solo está dejando muerte, tristeza y desolación"; además, le queda el anhelo de que algún día termine.

Obligación con las víctimas

Desde otro punto de vista, para el año 2005, el Congreso de la República aprobó la Ley 975 con la cual, según comenta el abogado Juan Diego Loaiza Londoño, se crea un mecanismo especial denominado Justicia Transicional, donde se establece la obligación de la reparación a las víctimas para contribuir con el esclarecimiento de la verdad.

Juan Diego Loaiza, comenta, al respecto: "Es importante y necesaria para quienes hacen parte del conflicto armado: víctimas, Estado, grupos armados y sociedad civil, porque permite obtener para todos verdad, justicia y reparación. Todo esto con el propósito de superar el conflicto".

Por otro lado, para este profesional del Derecho, el panorama laboral actual, en el ámbito nacional, es difícil debido a los altos índices de desempleo, la informalidad, el desconocimiento de las normas laborales, la falta de educación que no permite una preparación para el mundo laboral y la falta de políticas que incentiven y apoyen la iniciativa de la creación de empresa.

Por tanto, para Loaiza Londoño, una persona que ha estado al margen de la ley no tiene las suficientes oportunidades laborales para reiniciar su vida y generar ingresos desde la legalidad, por falta de oportunidades laborales y educativas.

Dado lo anterior, comenta el abogado: "Estas personas encuentran en la ilegalidad la forma de realizar alguna labor que pueda ser remunerada". Y agrega que "ha faltado acompañamiento y vigilancia, porque muchas veces la ilegalidad ha continuado, no existiendo una reinserción verdadera en la sociedad".

Agrega Yaneth Arenas que, desde una perspectiva psicológica, se puede decir que el ser humano en su proceso de vida va formando una estructura de personalidad y que esta estructura no se cambia fácilmente, "Pero sí se puede hacer un proceso de concientización donde el ser humano sea consecuente y genere un cambio en el comportamiento desde su pensamiento".

Alfredo actualmente maneja taxi, genera ingresos desde lo legal, y, aunque no está casado, comenta que tiene novia y afirma haber dejado en el pasado lo ocurrido en los campamentos de las Farc, en donde el miedo de abandonar las armas cada día era mayor, y de lo cual no habla, porque es algo que murió desde el día en que decidió salir de allí.

Para Guevara: "Hay que ver también que los modelos mentales son cuestiones que a pesar de que ningún código los establezca están estructurados".

Carlos Mario concluye que el primer cambio debe darse en conjunto, tanto desde la mentalidad de la sociedad como de las personas reinsertadas, pues mientras el *chip* no se cambie no va a pasar absolutamente nada: "Lo que se está haciendo es seguir con ese mismo *chip* bajo un diferente ropaje". ▲

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente.

De las armas al reintegro social

Wilson es un joven que a sus 16 años abandonó su participación en los grupos armados con la ilusión de poder estudiar y salir adelante.*

Deisy Toro Osorio
deisy.toroos@amigo.edu.co

En Colombia, actualmente más de 6.000 Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) han sido reclutados por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, según un informe entregado el presente año por la Defensoría del Pueblo. En el año 2013 se desvincularon de estos grupos 342 NNA, la mayoría procede de las Farc, seguida del Eln y por último las Bacrim, así lo demuestra el Análisis de Tendencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) realizado ese año.

Maltrato y falta de oportunidades

Wilson ingresó a los 15 años a las filas del Eln y es uno de los 282 NNA desmovilizados del 2011. "Pertenece a la guerrilla, al Eln; tenía muchas dificultades a nivel familiar, a mi papá me lo mataron cuando yo tenía seis años, su ausencia me afectó. Me desmovilicé porque las cosas no eran tan fáciles para mí, también por falta de oportunidades, me sentía aburrido allá donde estaba; primero veía que no estaba haciendo realmente lo que me gustaba, quería estudiar y nunca había tenido la oportunidad; pero ellos (Eln) me decían: 'Es que acá uno también estudia, no directamente en un colegio como usted puede estudiar en un pueblo o estudiar en una ciudad, sino que estudia depende de su comportamiento y la guerrilla le puede enseñar cosas'; pero eso nunca se vio", relata Wilson.

Las principales causas por las que ingresa un NNA a los grupos armados, se-

gún Adriana Chalarca, defensora especializada en desvinculados, son la falta de oportunidades y el maltrato intrafamiliar: "Esas son las causas expulsoras que llevan a los niños a la guerra, entonces, como quien los invita les ofrece cosas, que posiblemente son mentiras porque no les van a cumplir, ellos se vinculan a los grupos armados", explica la defensora.

Restablecimiento de derechos

La única entidad en el ámbito nacional encargada de velar por el restablecimiento de derechos de los NNA que han sido integrantes de los diferentes grupos armados es el Icbf. En Medellín hay dos instituciones encargadas de intervenir en el proceso de los desvinculados, la primera del proceso se llama Hogar Transitorio y la segunda es el Centro de Atención Especializado (CAE), el primero lo maneja Hogares Claret y el segundo, Ciudad Don Bosco, instituciones con carácter de internado que prestan atención veinticuatro horas al día, siete días a la semana, y desarrollan programas dirigidos a las víctimas.

Estas instituciones están regidas por la Ley 1098 del 8 noviembre de 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia, que tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los NNA y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Cómo educan a los niños

Los niños que llegan a las instituciones que ofrecen protección al menor vulne-

rable no entran a ciclos de educación regular, que inician en febrero y terminan en noviembre. Hay una institución en Medellín que es la Agencia Colombiana para la Reintegración, la cual se adapta y atiende no solamente a los mayores, sino también a los menores de edad que están dentro de las instituciones y algunas otras víctimas de otros hechos, expresa Chalarca. Una de las razones por las cuales los jóvenes no pueden ingresar a la educación normal es por ser extra edad, lo que les dificulta la estadía en una institución educativa.

Wilson ha tenido suerte con la educación. Cuando se desvinculó, ingresó a un Hogar Transitorio por tres años, allí le brindaron la educación primaria y luego la afianzó en Cartagena en un CAE, donde le enseñaron los aprendizajes básicos. Hoy, él cursa el grado décimo en un colegio de la ciudad de Medellín.

Reconocimiento y ayuda

Para Yelly Urrea, psicóloga de menores víctimas de diversos casos que trabaja en convenio con el Icbf, algunos jóvenes que han pertenecido a grupos armados pueden desarrollar estrés postraumático, conductas agresivas, delirios de persecución. Otros, en ocasiones, pueden seguir con su vida normal e incluirse socialmente de acuerdo a las conductas resilientes y fortalecimiento de sus aspectos personales.

Es necesario que las víctimas hayan sido certificadas por el Comité Operativo de Dejación de Armas, programa acreditado por el Ministerio de Defensa, el cual se encarga de avalar qué personas han sido o no pertenecientes a un grupo armado, y de esta manera poder brindarles una indemnización a estas víctimas, de lo contrario no contarán con apoyo económico.

Según lo afirma el Artículo 3 de la Ley 1448 de víctimas del año 2011, los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los Niños, Niñas o Adolescentes hubieran sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.

A un solo paso

Para Wilson no era fácil la idea de abandonar las armas, pero un día en compañía de un colega del Eln, decidió escaparse: "Nuestro propósito no era entregarnos sino irnos para el Oriente antioqueño a la casa de mi compañero a trabajar, pero

después de todo nos decidimos y nos entregamos al Ejército", recuerda Wilson.

Caminaron toda la noche por el monte para llegar en la mañana sin que los otros frentes guerrilleros se dieran cuenta. "Cuando salimos a la carretera venía un carrotanque a eso de las seis de la mañana, le puse la mano y nos paró, le pedí el favor que nos arrimara al municipio de Cáceres, nosotros íbamos de civiles porque habíamos entrado a una casa a pedir ropa y también un celular, nos echamos 'tierrita' para que vieran que éramos campesinos", relata el joven.

"Nos montamos arriba del carrotanque y nos tapamos con una tela verde para que no nos vieran. Fredy* me decía:

"Algunos jóvenes que han pertenecido a grupos armados pueden desarrollar estrés postraumático, conductas agresivas, delirios de persecución".

-Sabe qué sabe qué entreguémonos mejor, espéremos a ver si lo que dicen en la emisora es verdad.

-¿Y qué tal que nos maten?

-Pero no tenemos plata pa' irnos, pensalo bien.

-Ahh es que no sé hermano... vamos a hacerlo pues, marquemos la línea esa del Ejército.

Nos contestaron, pero no nos creían, cuando le dijimos de qué frente guerrillero éramos ahí si nos creyeron y mandaron por nosotros".

Wilson logró salir de la guerrilla y con ayuda del Ejército y el Icbf pudo entrar a protección y aprovechar los beneficios que le ofrecieron para su reintegro a la sociedad. Ahora ha podido tener contacto con su madre y algunos de sus hermanos. Además, trabaja como educador formativo en uno de los CAE de la ciudad.

No todos los casos de NNA que se desvinculan o son rescatados por el Ejército son exitosos, muchos de ellos no acceden a las ayudas que se les ofrecen y un porcentaje de ellos regresa a los grupos armados. Según Adriana Chalarca, muchos NNA manifiestan que se sienten mejor en esos lugares.

"Yo doy gracias a Dios porque logré salir de la guerrilla", expresa Wilson. Él espera terminar su bachillerato y aspira estudiar actuación para tener dinero y traer a su madre y a su hermano a vivir junto a él y de esta manera poder ayudarlos. ▲

(*) Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes.



Existen programas que apoyan a los Niños, Niñas y adolescentes que se desvinculan de los grupos armados al margen de la ley. Foto: Deisy Toro

Entre la conciencia y la jurisprudencia



Existen otras alternativas para quienes la prestación del servicio militar resulta contrario a sus principios y creencias. Foto: Hanier Anturi Ramírez

Hanier Anturi Ramírez
hanier.anturira@amigo.edu.co

La prestación del servicio militar obligatorio y el reclutamiento forzado han generado en muchos jóvenes de Antioquia y el resto de Colombia miedo y negación resistente. Algunos de ellos le dicen rotundamente no a esta obligación porque desean continuar con sus estudios, no quieren arriesgar su vida y estabilidad física o simplemente sus ideologías o creencias les fundamentan el rechazo a la guerra.

Esta situación es por la que la mayoría de varones mayores de edad tienen que pasar, una realidad que se convierte en un artículo plasmado en la Constitución Política Colombiana, donde se decreta que, "todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las exenciones que establece la ley", Artículo 3 Ley 48 de 1993.

El Ejército Nacional de Colombia le brinda otras alternativas a aquellos que no quieren prestar el servicio militar obligatorio, como por ejemplo el pago de la cuota de compensación militar, una suma de dinero que depende del estrato socioeconómico del individuo.

Sin embargo, hay quienes que por sus principios religiosos, políticos, éticos o antimilitaristas rechazan cualquier relación o participación con el Ejército; también porque consideran que el reclutamiento es realizado arbitraria e ilegalmente y deciden optar por el derecho de objeción de conciencia. Según la Acción Colectiva de Objetores y Objektoras de

Conciencia (Acooc), con sede en Bogotá: "La objeción de conciencia es el derecho que tenemos los individuos de no acatar, rechazar o rehusarnos a mandatos que entran en contradicción con nuestras creencias por considerarlas contrarias a nuestra conciencia".

La objeción en Medellín

Bogotá, frente a la objeción de conciencia ha tenido un trabajo a partir de la mediación política en un marco jurídico. Se ha planteado, por ejemplo, la propuesta para que los jóvenes que no quieran prestar el servicio militar obligatorio en un batallón o en campo abierto, accedan a la prestación de un servicio social comunitario. Mientras que Medellín ha realizado un trabajo desde un punto contestatario que la ha llevado a ser una de las ciudades más representativas y pioneras en objeción de conciencia en Colombia.

En la ciudad, La Red Juvenil, organización que hoy es conocida como Red Feminista y Antimilitarista, realizaba acciones preparadas desde el arte y el teatro con el apoyo de la Internacional de Resistencia a la Guerra (IRG) en la Cuarta Brigada del Ejército y en las jornadas de reclutamiento, acciones que marcaron una pauta en el trabajo de la objeción y el antimilitarismo.

"Se hablaba de objeción y antimilitarismo porque se va en contra de una estructura que es dominante y de carácter patriarcal; cuando decimos que es de carácter patriarcal entramos a ver

La Sentencia T-018/12 decretada por la Corte Constitucional reconoce el derecho de objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio; a pesar de que algunos jóvenes están amparados jurídicamente, optar por este derecho para resolver su situación militar resulta complicado en muchas ocasiones.

entonces los uniformes, cómo nos ponen en jerarquías y dónde hay un dominio", explica Mauricio Durango Puerta, miembro del Tejido de Objeción de Conciencia en Medellín.

Las personas encargadas de realizar esas acciones en la Red Juvenil eran objetores de conciencia, antimilitaristas y anarquistas. Un ejemplo de ello, era el Festival Antimili Sonoro, con su lema: "Desobedecer es el arte de vivir feliz". Un festival realizado desde 1998, con el propósito de decirle no al servicio militar obligatorio.

La Red Juvenil ahora apoya la posición de la mujer frente al militarismo, y ha surgido el Tejido de Objeción de Conciencia en Medellín, integrado por quince organizaciones de la ciudad, buscando formar y dar a conocer a los jóvenes el derecho a objetar, el servicio militar obligatorio y las garantías que tienen desde la Corte Constitucional.

El proceso para objetar

"La primera idea que me llevé fue que tratándose de un proceso jurídico era complicado acceder a este, por la necesidad del pago de un abogado que le ayude con el conocimiento de la ley para hacer respetar su derecho a objetar", relata Eddie Parra, promotor de la objeción de conciencia con Acooc.

Organizaciones como Acooc de Bogotá, y el Tejido de Objeción de Conciencia en Medellín comparten el mismo estándar para objetar y realizan el seguimiento de este proceso sin ánimo de lucro.

Lo primero es realizar una declaración, donde se dan a conocer por escrito las razones para objetar frente al servicio militar y se acompaña con las sentencias que las respaldan desde la Corte Constitucional. Esta, primero, reconoce la objeción de conciencia en el marco del derecho; segundo, declara que las batidas son ilegales y, por último, ordena al Ejército a

divulgar dentro y fuera de los cuarteles el tema de la objeción por conciencia.

"Luego de tener la declaración con las sentencias, también se incluyen las anotaciones que ha dado la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la ONU, y se anexa un derecho de petición. Se llevan al distrito de reclutamiento, exigiendo como ciudadano que le resuelvan su situación militar, que también es un derecho, y si no dan una respuesta concreta, toca montar tutela y ya eso va con un acompañamiento jurídico, desde las altas cortes", comenta Durango Puerta.

Vocación mas no obligación

El Ejército Nacional de Colombia también se ha pronunciado en cuanto al manejo que le dan al derecho de objeción de conciencia y la forma en la que reclutan a los jóvenes. Cleopatra Vásquez, asesora jurídica en la Cuarta Zona de Reclutamiento en Medellín, afirma que desde el 2011 las batidas ya no se realizan, pero sí las compelaciones para verificar la situación militar de los ciudadanos. Frente al derecho de objeción de conciencia expone: "Este es reconocido como una sentencia pero no como una ley, sin embargo es respetado siempre y cuando las razones presentadas sean demostrables, fijas y sinceras".

"Mi conciencia me indica que no debo empuñar un arma para matar y me es imposible ser parte de algún grupo armado porque va en contra de mis principios, de mi esencia humana e ideas políticas", defiende Carlos Mario Saltaren, objetor de conciencia por convicción y pacifista radical.

El Tejido de Objeción de Conciencia en Medellín actualmente realiza el seguimiento de apenas cinco jóvenes que optaron por el derecho a objetar; también busca derribar la libreta militar y por consiguiente, el servicio militar obligatorio, planteando que aquellos ciudadanos que se integren al Ejército Nacional lo hagan por vocación y no por obligación, una propuesta que Cleopatra Vásquez ve factible si en el país no hubiera tanto conflicto. ▲

Cultura y educación, herramientas contra el conflicto armado

“En Antioquia nos estamos preparando para la paz. Reconocemos que si bien en La Habana se firma, es en nuestras comunidades donde tenemos que construirla. Gran parte de ese tejido se desarrolla desde el arte”. Juan Carlos Sánchez Restrepo, director del Instituto de Cultura de Antioquia

Karyna Beltrán Úsuga
karyna.beltranus@amigo.edu.co

Medellín ha sido una de las ciudades de Colombia más afectadas por el conflicto armado, por eso desde hace cuatro años se implementó el programa de desarrollo Cultura de la Paz, uno de los proyectos más exitosos en la construcción de tejidos sociales por medio del arte, según el director del Instituto de Cultura, Juan Carlos Sánchez Restrepo.

María Eugenia Beltrán Uribe, gestora de Cultura de la Paz en Medellín, psicóloga y docente, plantea que en Remedios, Nordeste de Antioquia, donde ella también trabaja: “Los niños ven morir a sus amigos, el conflicto armado es el diario vivir convirtiéndolos en protagonistas. La alta deserción estudiantil hace que los niños sueñen con ser ‘paracos’, dificultándose llevar a cabo la práctica de la cultura de la paz.”

Esta consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas.

Por otro lado, María Eugenia comenta que este proyecto en Medellín tiene un contexto diferente, el cual consiste en desarrollar estrategias para que los jóvenes y niños, tentados a pertenecer al conflicto, participen de actividades culturales como la música, el teatro y la pintura.

El principal objetivo es brindar a los autores del conflicto una oportunidad de salir de la guerra. Estudio, trabajo y deporte hacen parte de las actividades de desarrollo de Cultura de la Paz, apoyadas por corporaciones como Corvas, Roca y Nuestra Gente, ubicadas en los barrios más afectados por la violencia en Medellín, explica la gestora.

Por otro lado, María Eugenia comenta que el verdadero problema surge cuando la práctica no abarca directamente a las poblaciones afectadas por el conflicto armado: “Se debe llegar a los lugares más recónditos de Antioquia por medio de la educación y así darle fin a esta guerra sin sentido”.

Gustavo Alonso Cadavid Correa, comisario de Familia en Medellín, quien siempre ha estado de acuerdo con la idea del proyecto, señala que le parece dinámica y atractiva para los jóvenes y niños. Sin embargo, para él la problemática radica en que los consejos y las secretarías municipales no dan el tratado de obligatorio cumplimiento al proyecto.

El director del Instituto de Cultura de Antioquia, Juan Carlos Sánchez Restrepo, respondiendo a lo planteado por Cadavid, afirma que: “Los niños en Medellín tienen una maleta llena de oportunidades, pero cuando se alejan de la ciudad disminuye entre un 10 % a 15 %”. Además, señala que el Instituto vela por que este proyecto tenga que cumplirse.

De igual forma, él plantea que se está creando la posibilidad de cerrar brechas de desigualdad social entre las regiones y las personas para que los niños de tantas comunidades rurales o cabeceras municipales, que han sido tan golpeadas por la violencia, accedan a las oportunidades en temas de cultura, dotación, iniciativas locales y motivación de su talento, con apoyo económico del departamento de Antioquia a través del Instituto de Cultura.

"Se debe llegar a los lugares más recónditos de Antioquia por medio de la educación y así darle fin a esta guerra sin sentido".

La psicóloga Beltrán afirma que estas iniciativas son buenas pero les hace falta llegar a todos los pueblos como Remedios. Según ella no todos los niños cuentan con la posibilidad de acceder a las convocatorias del proyecto puesto que estas son por Internet.

Al respecto, Sánchez Restrepo reconoce que otra posibilidad de generar una cultura de la paz en los niños y jóvenes



Desde el arte y la educación, las comunidades pueden reconstruir el tejido social en un trabajo conjunto con todos los sectores de la sociedad. Foto: Darío Alberto Jiménez Ramírez

de los pueblos de Antioquia, que no pueden acceder a Internet, sería creando nuevos referentes donde los gestores y artistas se vuelvan ejemplos de las campañas en los diferentes hogares rurales de los municipios antioqueños, además de los compromisos de creación de tratados por parte de los consejos municipales donde estos cuenten con el presupuesto necesario para hacer del proyecto un éxito.

Para Cadavid Correa, una solución sería que los consejos municipales, en acuerdo con el Gobierno colombiano, crearan una secretaría para jóvenes y mujeres donde el tema del desarrollo de la práctica fuera uno de los pilares fundamentales, con el fin de generar en los actores del conflicto más reinserciones.

Pedro*, un reinsertado del conflicto, gracias al proyecto ejecutado en la Corporación Corvas, afirma que “el éxito de la práctica se debe a la recolección de firmas y voz a voz de cada una de las personas que viven en el barrio Aranjuez y que de alguna manera han evitado el conflicto”.

Por otro lado, la psicóloga Beltrán reconoce que los procesos de reinserción mediante estos métodos pueden ser viables, pero en pueblos como Remedios recolectar firmas y hacer campañas sería un problema, debido a que la gente correría peligro por ser territorio en conflicto armado.

Para el sociólogo Luis Hernando Restrepo Loaiza, el proceso de Cultura de la Paz le brinda a los jóvenes y niños los conocimientos esenciales para así tener un comportamiento adecuado en la sociedad, ser más dinámicos, atentos, dispuestos a compartir sus ideas y expresar sus emociones desde el arte.

Restrepo Loaiza, sostiene que “la cultura de la paz es el proceso fundamental para construir los verdaderos tejidos sociales, creando así, lazos de amistad, risas y sueños expresados a través de piezas musicales, obras de teatro y cuadros de pintura”. ▲

(* Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente.

Colombia necesita más Juegos por la Paz

“El deporte tiene el poder de transformar el mundo y de unir a la gente como pocas cosas... Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales”.

Nelson Mandela

Jorge Andrés Ramírez Franco
jorge.ramirezfr@amigo.edu.co

Cuando se acaban los sueños de aquellos que pensamos vivirían por siempre, duele recordarlos, pero sin duda dolería más dejarlos en el olvido. “Lo recogí herido en una esquina; lo llevé a la casa y lo atendí. Cuando iba a salir se levantó de la cama donde estaba acostado y vio en el fondo de la pared las fotos de mi hijo y me preguntó: ‘¿qué hacen ahí las fotos de ese man que matamos antier?’. Respondí que esta era su alcoba; esa, su cama y yo, su mamá”, relata Pastora Mira García, reviviendo ese fatídico instante.

El joven guerrillero de tan solo 17 años de edad entró en shock y se puso a llorar; mientras lo hacía le iba contando todos los vejámenes a los que había sido sometido su hijo, pues según sus relatos, lo torturaron por quince días antes de matarlo.

En la intimidad de su corazón, doña Pastora gritaba: “¡Dios mío, esto no me puede estar pasando!”. Sin embargo, ya todo estaba hecho; para ese momento ya le había curado las heridas, servido el desayuno e, irónicamente, vestido con la ropa de su hijo. Contrario a lo que podría esperarse, ella recuerda: “Nos miramos y le dije: hijo, en algún lugar del mundo debe haber una mamá que clama por usted; vea el teléfono, llámela, si le da pena no le diga qué está haciendo, pero dígame que está vivo”.

Sería difícil encontrar un mayor gesto de paz que el de una madre que perdonó a quienes asesinaron a su “niño” como solía llamarlo. Una que, como muchas otras, ve en los Juegos por la Paz la oportunidad de cerrar ese ciclo de dolor y, al igual que la Flor de Loto, mostrar que de los pantanos más hostiles nacen las más hermosas flores. Hoy, San Carlos, Oriente de Antioquia, lucha contra la guerra, dejando que sus niños y jóvenes, a través del deporte, reclamen su derecho a no ser enemigos de nadie.

El deporte al servicio de la paz

“Fue alrededor del año 2000 que se empezó a gestar la idea de realizar los Juegos por la Paz”, comenta Wilson Murillo, resistente del corregimiento El Jordán. Aún en el marco del conflicto e incluso

cuando este más recrudecía, los sancarlitanos fueron valientes y creativos para construir la paz, pues querían convertir esa tierra de nadie en una tierra de todos: “En donde se le diera memoria a las víctimas, y se uniera a las poblaciones vecinas para reparar simbólicamente a quienes perdieron más que sus tierras”, enfatiza Murillo.

A doña Pastora esa idea no le molestaba. Al contrario, para ella y sus vecinos era una ocasión de reencuentro, de escucha, pero “una escucha respetuosa, porque lo que ellos menos quieren es dar lástima ni nada de eso”. Aunque cualquiera la sentiría al saber que la historia de su hijo no ha sido su única tragedia. Antes de eso, los guerrilleros le secuestraron y asesinaron a su hija; pasó uno, dos y así hasta el séptimo año de búsqueda de su cadáver, yendo de fosa en fosa, con una pala y hasta con sus mismas manos removiendo la tierra que escondía los restos óseos de quienes fueran sus vecinos, amigos y conocidos. Fue terrible cuando un guerrillero le pidió una moto a cambio del cadáver de su hija.

A víctimas como ella, el deporte les sirve para limpiar y sanar esas heridas, siendo su voz y su escudo, por eso es esencial para la vida misma, porque es sinónimo de alegría, bienestar y hermandad. Así lo reconoce la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en un informe en el que afirma que

“(…) puede favorecer el desarrollo personal de niños y adolescentes, así como impulsar el desarrollo social, cultural y económico de comunidades enteras o fomentar intercambios pacíficos entre distintas culturas”.

Todos con un mismo objetivo

El proyecto de creación de los Juegos por la Paz se legitimó en el año 2001, siendo unas justas deportivas en las que se competía en fútbol, microfútbol, baloncesto y voleibol. “Se trataba de no renunciar a la integración; allí recogiendo los muertos y en el ‘poli’ con los partidos. Decir: sí, estamos en dificultades, pero aquí estamos parados para atenderlas. Mucho dolor por la pérdida de esas vidas, pero demasiada resistencia para no permitirle al violento que siga arrasando con la población”, concluye Pastora.

A estos Juegos se les unió la mayoría de la población, pues para ellos eran unas completas fiestas. Todos han tenido significativas contribuciones para la preparación y realización del evento, destaca Hamilton Cuesta Parra, coordinador de la Institución Educativa Joaquín Cárdenas Gómez. El simple hecho de pintar y organizar las fachadas de sus casas para que los visitantes vean su riqueza arquitectónica y atenderlos con la amabilidad, habla mucho de la cultura que se ha infundido en ellos, y no por imposición, sino por apropiación.

Catorce años de historia

“En esa primera versión (2001) participaron siete municipios: San Luis, Alejandría, Concepción, Granada, San Rafael, Guatapé y El Peñol. Hasta ahora se han realizado catorce versiones; para

este año ya no vinieron siete delegaciones, sino que fueron 58 los municipios de todo el país que a través del deporte querían aportar su granito de arena para la paz”, afirma David Londoño Sánchez, director del Instituto de Deportes de San Carlos.

En vista de la creciente participación, “al nombre Juegos por la Paz hubo que anexarle: la Integración del Oriente antioqueño, pues en ese afán de unir voluntades se logró reunir a gran cantidad de municipios que deseaban aportar a la paz por medio del deporte”, agrega Londoño.

Sería muy egoísta quien estuviera en contra de estas iniciativas; sin embargo, líderes comunitarios como doña Pastora, quien defiende estos proyectos, sienten que hay aspectos por mejorar porque “están perdiendo su razón de ser; ya no es la integración del Oriente, sino el fogeo para los juegos departamentales”.

“Se trataba de no renunciar a la integración; allí recogiendo los muertos y en el ‘poli’ con los partidos (...)”.

Los habitantes del área rural no están alejados de los Juegos por la Paz, personas como María de los Angeles Gonzáles Murillo, de la vereda El Prado, corregimiento de Samaná, expresa: “Mi corazón

se invade de alegría, no solo por ver a todos esos niños divirtiéndose, sino porque entre ellos se encuentra mi hija Esmeralda que hoy cursa décimo grado de bachillerato”. Así, familias como la de ella sienten reparación y dejan en el campo de juego los odios y rencores que algún día sintieron.

Como la paz se hace con el enemigo, David Londoño concluye que quienes fueron los victimarios del pueblo hoy participan de los Juegos, no compitiendo deportivamente, sino “colaborando en la parte logística, con el aseo de las instalaciones, además de guiar a las delegaciones y acercarlas a sus alojamientos”.

El carro bomba

Año 2004. Las cosas parecían andar mejor. Era la IV versión de los Juegos y como siempre se realizaban finalizando el mes de mayo. En la inauguración del evento un carro bomba rompió el silencio de las calles. Pese al dolor por los muertos y heridos, Hernán García, árbitro deportivo de San Carlos, asegura: “¡Fue algo espectacular!, porque vimos la solidaridad de los líderes de cada municipio; a pesar de eso nadie se fue. Ahí comprendimos que el deporte verdaderamente construye y une los pueblos”.



Por iniciativas como estas, que tienen la finalidad de reconstruir el tejido social, en el año 2011 San Carlos ganó el Premio Nacional de Paz. Foto: Ronal Arlez Parra Hincapié

De La Habana a las aulas

La educación es una herramienta fundamental para afrontar el panorama que se abre ante una eventual firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc.

Johana Amariles Ramírez

Johana.amarilesra@amigo.edu.co

Desde el 2012 se viene adelantando en La Habana, Cuba, el proceso de paz entre el gobierno y las Farc, que ha mantenido a Colombia en completa incertidumbre. Los comentarios de expertos y ciudadanos cobran cada vez más fuerza por el sube y baja de tensiones y de peticiones que se desprenden de la mesa de conversación, entre ellas, las relacionadas con el sector educativo.

A raíz del tema, se han planteado varias posturas que le han dado, en algunos casos, un aire de optimismo y en otros de desazón. Desde el sector educativo se ha mantenido cierta inconformidad por la poca inversión en esta área. No obstante, el presidente Juan Manuel Santos indicó en la posesión de su segundo mandato, que no se van a reducir las Fuerzas Militares, pero se van a disminuir las inversiones de este rubro y se va a invertir en educación.

Para contextualizar lo anterior, es importante recordar que en Colombia, alrededor del 3,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) es destinado a la educación, a diferencia de países como Ecuador y Bolivia que invierten cerca del 16 %, como indica el sociólogo y profesor universitario, Juan Carlos Ocampo.

Respecto a los acuerdos en La Habana, hay bastante expectativa en las universidades. El decano de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Fundación Universitaria Luis Amigó (Funlam), Ancízar Vargas, asegura que: "Si se firma, la educación debe verse beneficiada".

Y es que las universidades se han visto vinculadas directa e indirectamente en procesos relacionados con la paz, como la desmovilización, ya sea por proyectos de aula en los que se aborda el postconflicto, o por acoger en sus planteles educativos estudiantes que han dejado las armas.

Sin limitarse a las suposiciones que se desprenden del posible incremento de la inversión en este sector, algunas de las medidas adoptadas por las universidades han sido: la reestructuración de algunas cátedras y la vinculación de las temáticas al postconflicto.

En Medellín, según Vargas, ya son varias las universidades que han relacionado sus procesos académicos con el tema: La Funlam por medio de cátedras de paz; la Universidad Autónoma Latinoamericana está ofreciendo frecuentemente foros sobre postconflicto; la Universidad de Antioquia, como grande impulsora de la paz en la ciudad, se está fortaleciendo para tomar este tema con fuerza.

Nuevos Caminos

"La mentalidad en Colombia es otra: más política, más económica, menos social".

Los estudiantes universitarios se han involucrado en los nuevos procesos de aprendizaje que se han emprendido. "Puntos tan relevantes en un postconflicto como la reintegración de los desmovilizados, violencia urbana, pobreza, narcotráfico,

educación, son fundamentales en esa búsqueda incesante por acabar con el flagelo de la violencia y la desigualdad en el país", expresa Juan Pablo Rodríguez Silva, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana.

La educación en Colombia ha sido abordada por muchos como un asunto prioritario, no obstante, como señala el artículo del presente año publicado en el sitio web de la Organización de Naciones Unidas (ONU): *Día Mundial de Población: invertir en juventud como prioridad de desarrollo más allá del 2015*, solo uno de cada tres jóvenes accede a la educación superior en el país. Adicionalmente, se menciona que en las zonas urbanas, únicamente el 33 % de los jóvenes entre 18 y 25 años están inscritos en el sistema educativo.

En los barrios que, por lo general, tienen situaciones socioeconómicas complejas, se terminan conformando bandas crimina-



La transformación de una sociedad empieza por la educación de sus integrantes. Foto: Johana Amariles

les integradas por personas que toda su vida se han dedicado a empuñar un fusil. Lamentablemente, muchos de estos casos están protagonizados por jóvenes que no han encontrado posibilidades en su medio.

Para el sociólogo Juan Carlos Ocampo, la construcción de una paz estable no inicia ni termina con la firma del tratado en La Habana, el cambio se construye entre todos, pues "la mentalidad en Colombia es otra: más política, más económica, menos social".

Ocampo también añade que en un proceso de desmovilización, refiriéndose en este caso al que se adelanta en el país, debe tenerse en cuenta un componente más que importante y quizás no muy abordado: la capacitación social. En este punto se debe involucrar tanto al ciudadano como al reinsertado.

Una visión social

Por su parte, el psicólogo Sebastián Restrepo añade que para la víctima no es tan fácil convivir con el victimario. Sin embargo, desde esta área se ha abordado la perspectiva de la resiliencia, que consiste básicamente en la capacidad del ser humano de superar los obstáculos.

Este término podría adaptarse al sector educativo. De incrementarse en el país el porcentaje de inversión en educación, habría que pensar realmente en la transformación social mediante la capacitación para los jóvenes integrantes de grupos armados, entre los que se cuen-

tan las bandas criminales urbanas, conocidas como Bacrim.

Es apresurado asegurar que la paz se va a lograr al firmar el tratado en La Habana, esto, debido a que los grupos insurgentes no se reducen a 7.000 hombres, que son el aproximado de integrantes que tiene las Farc en la actualidad, según indica el general de las Fuerzas Militares, Jorge Enrique Mora.

Colombia tiene otras problemáticas sociales, como la pobreza y el desempleo, que requieren de un árduo trabajo para lograr bases más sólidas de desarrollo y sostenibilidad. Entonces, la educación tiene un papel fundamental en esa búsqueda y por esto se anhela su incremento presupuestario. "Uno esperaría que si esos recursos no van a la lucha armada, sean destinados a la inversión social", expresa el economista y docente universitario, Juan Luis Ángel.

Podría pensarse que al disminuir el gasto militar y al aumentar la inversión en educación, se construiría una paz más duradera, con componentes más sólidos y estables que mejorarían las condiciones de vida en Colombia.

"Una firma en La Habana no es la paz, pero todos los sectores sumados: universidades, empresas privadas, Estado, entre otros, sí pueden generar una visión de cambio social", concluye el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Funlam, Ancízar Vargas. ▲

SEXTANTE

Los estudiantes del curso Producción de Prensa felicitan a la Fundación Universitaria Luis Amigó por sus 30 años de vida académica, en los que se ha destacado por su compromiso con la formación de profesionales de conciencia crítica, ética y social.

De igual manera, se unen a la celebración de los 15 años del Programa de Comunicación Social, el cual ha sido un aporte al desarrollo académico de la Comunicación Social en la ciudad, la región y el país.

Educación para el postconflicto: necesidad de un país

Valentina Herrera Cardona
valentina.herreraca@amigo.edu.co

Duván Sepúlveda Rúa
yeider.sepulvedaru@amigo.edu.co

Por primera vez en muchos intentos de conversación con grupos al margen de la ley, el país vislumbra una posibilidad más segura de un fin al conflicto. Por ello, con el fin de promover en la población colombiana acciones que lleven a la construcción de paz, el sector privado ha creado la campaña Soy Capaz. Por su parte, el sector público le apuesta a la Cátedra de la Paz, enfocada a la educación en el país.

Iniciativas, vistas por expertos, como una respuesta a la necesidad de una pedagogía del conflicto en el país, que agrupe intereses políticos y ciudadanos, en el marco de las conversaciones con la guerrilla de las Farc.

Campaña Soy Capaz

Esta campaña, surge de la vinculación de más de 100 empresas privadas del país, con el objetivo de enviar un mensaje a la sociedad, que invite a la apropiación de la construcción de paz, impulsando la participación ciudadana y la despolitización de esta. Así lo plantea, el informe entregado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) para presentar la campaña. Aunque para algunos, la iniciativa es un ejercicio importante para la preparación del país, otros plantean que carece de trascendencia o eficacia.

Para José David Medina Holguín, trabajador social y docente de la Universidad de Antioquia, es "Una idea que busca generar opinión pública, y termina registrando una marca. Es algo muy vacío, le falta discusión, haber pasado por bases sociales, es una campaña muy mediática".

Por otro lado, para el politólogo de la Universidad de los Andes, Lucas Jaramillo, es una propuesta necesaria: "Es ético acabar el conflicto de esta forma. Es entonces generar un terreno nuevo en un contexto donde el gobierno ha optado por el diálogo". Añade que aunque es una campaña que no tiene un futuro a largo plazo, representa un alivio "para el discurso desgastado de reconciliación, cambiando además la imagen que se tenía del gobierno que celebra la muerte de una persona en combate como un éxito".

A esto, la directora de la sección de pedagogía del Museo Casa de la Memoria, Alejandra Cardona, comenta: "Los medios de comunicación juegan un papel muy importante, donde es recomendable que den ejemplo, debido a que hoy en día presentan producciones que no tienen ningún contenido crítico ni reflexivo; se exponen los hechos con una banalidad como si lo que se muestra fuera algo muy cotidiano".

Cátedra de la paz

El tema de cómo construir de forma conjunta la paz, también ha sido abordado

"El día que comprendamos a los contendientes mejor de lo que ellos mismos se entienden, se habrá recorrido buena parte del camino hacia la paz".

Antanas Mockus



Las propuestas artísticas realizadas por personas víctimas del conflicto constituyen nuevos caminos pedagógicos para hacer memoria y resistencia ante el conflicto armado. Foto: Julian Orozco

desde la educación, donde se proponen espacios de discusión como la Cátedra de la Paz.

Ariel Armel Arenas, principal defensor de los derechos de consumidores, dirige esta iniciativa, que tiene como objetivo crear un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo donde se promueva la cultura de la paz. Aprobada por el Senado de la República, la Ley 1732 del primero de septiembre de 2014: "Establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país como una estrategia pensada para el postconflicto".

Jaime Alberto Carrión Suárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, considera que: "En los públicos del proyecto deben incluirse las personas en condición de integración -a la vida civil-, e implementar el modelo de 'paz y reconciliación' que lo acoge todo el país. El cual consiste en que el proceso de estas personas es exitoso si tienen acompañamiento además de lo institucional, familiar y del entorno". Para Carrión: "Las herramientas más adecuadas para la Cátedra son las experienciales, donde los estudiantes salgan de las clases, tengan contacto directo con la sociedad,

hayan testimonios y visitas a organizaciones que promuevan el tema de conflicto y paz como el Museo Casa de la Memoria".

La Memoria, elemento primordial

El Museo Casa de la Memoria, creado por la Alcaldía de Medellín, promueve acciones que contribuyen a la reconstrucción, la visibilización y la inclusión de la memoria histórica del conflicto armado en la ciudad. Buscando con ello aportar a la transformación de la historia de la violencia en aprendizajes sociales para la convivencia ciudadana, bajo la premisa de "recordar para no repetir".

Johana Graciano, mediadora en pedagogía del Museo Casa de la Memoria, recomienda para trabajar el tema de la memoria proyectos que el museo ha trabajado como "Casa de Ensueño, Talleres de Cartografía, entre otros, que buscan narrar el conflicto y por los cuales el niño reconoce su territorio y recuerda su historia".

Alejandra Cardona plantea: "La cátedra debe fomentar principios de igualdad, respeto y aceptación de las diferencias. Para eso se pueden trabajar con elementos didácticos como cartillas o documentales como *No hubo tiempo para la tristeza*,

Impunity, El circo de las mariposas y Lúdica macábrica. Frente a los públicos se podría instruir a los de bachillerato y universidades, sobre temas como la construcción del ciudadano y Derechos Humanos".

Primeros pasos

En Antioquia hay varios antecedentes que refuerzan la Ley, como lo es el Centro de Educación para la Paz y la Reconciliación (Cepar) y la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz).

El Cepar, según la coordinadora general del componente educativo, María Elena Serna, cuenta con 1.500 estudiantes donde, "víctimas y victimarios del conflicto armado se encuentran para estudiar y vivir la oportunidad de reconciliarse e iniciar una nueva vida, donde los únicos problemas que se presentan son de matemáticas o académicos". Ella considera, de acuerdo con Carrión, que la Ley debe tener en cuenta las personas en condición de integración, pues es pertinente reunir las, enseñarlas a convivir, hacerles ver la realidad, brindarles apoyo jurídico, psico-social y generación de ingresos.

Redepaz es una organización que trabaja desde 1993 en el territorio nacional por ampliar y consolidar el movimiento social por la paz, como iniciativa de poder ciudadano, con sentido político, cultural y ético, con proyectos como "Mesa por la Vida".

Jhon Fernando Mesa, su coordinador en Antioquia, señala que el primer paso para la cátedra es "sensibilizar a los maestros, darles una visión del postconflicto, de la cultura de la paz, llenarlos de herramientas para que puedan dictar la cátedra y así puedan transmitir, para que la Ley no se vuelva una materia más. Luego sería buscar las visiones que tiene el proyecto y a partir de allí, dar metodologías para resolución de conflictos y generar espacios de convivencia y desarrollo".

Metodología de la Cátedra: un reto

No obstante, para el politólogo Lucas Jaramillo resulta ser "otra cosa para dormir estudiantes. En la actualidad, se tienen un montón de cátedras, que no penetran el mundo de los adolescentes. Es una mirada adultocéntrica terrible". Agrega: "Este es un país donde no se hacen cosas serias en el ámbito legislativo, por eso hay tantas leyes, porque ninguna es profunda. (...) Se necesita una reforma educativa donde se cambie cómo se cuentan las cosas".

Ambas propuestas deben ser reforzadas para que su eficacia sea a corto y a largo plazo. Tanto la Campaña Soy Capaz, como la Cátedra de la Paz, son iniciativas necesarias y pertinentes para la actualidad del país, que ante la posibilidad del postconflicto busca prepararse para el cambio. ▲

La paz se teje con el diálogo

Los actores están en función, las luces se posan sobre ellos y los espectadores están a la espera de un desenlace que se ha alargado por más de cinco décadas. Gobierno y Farc están en la mesa con los guiones de los acuerdos, que buscan escribir una nueva historia en la que todos seamos protagonistas. Las diferencias solo se desdibujarán con el diálogo.

Alexander Herrera Gil
alexander.herreragi@amigo.edu.co

En medio de los vientos de paz que soplan desde la mesa de negociación en La Habana entre el Gobierno de Colombia y las Farc, están las víctimas del conflicto que esperan una solución. La esperanza es cerrar unas oscuras y tristes décadas que ha sufrido la sociedad colombiana. Ese conflicto que en sus inicios tuvo una intención de cambio social, hoy ha devenido en una lucha económica.

Actualmente la fuente del conflicto la propicia el dinero que deja el negocio de la droga y los puntos estratégicos para su distribución. Según lo menciona el teniente Diego Fernando Cifuentes, del grupo antiextorsión de la brigada VI del Ejército: "La guerrilla tiene sus cultivos cerca a las salidas del país, por el Catatumbo, Cauca, el Chocó. Ellos les dan dos millones iniciales a los campesinos y obreros para el cultivo de amapola, luego se la compran y ellos (los guerrilleros) la comercializan acá y en el extranjero".

El panorama de los diálogos es complejo, no solo por lo anterior sino, además, por las acciones de quema de buses, ataque a policías y extorsión a empresarios por parte de la guerrilla.

"Algunos frentes como el Teófilo Forero y el Sexto han mencionado no entregar-se si se firma la paz", señala el teniente del Ejército.

Hablar de paz, en un conflicto que le ha arrancado al país más de 5,5 millones de vidas de niños, mujeres, indígenas, sindicalistas, campesinos, periodistas, como lo reseña la revista Semana en el desarrollo de su proyecto *Víctimas del conflicto armado en Colombia*, es un panorama poco alentador para el proceso. También lo es la apatía frente al perdón que algunas personas manifiestan al ser cuestionadas sobre si estarían dispuestas a perdonar a los victimarios. Varias de ellas responden: "Con reinsertados no quiero nada".

Una visión diferente

Precisamente, quitar ese rótulo a los reinsertados, en un escenario de postconflicto es uno de los primeros pasos que la ciudadanía debe dar, tal como lo sugiere Silvio Alejandro Herrera, coordinador de Bienestar del Centro de Educación para la Paz y la Reconciliación (Cepar): "Tratar de cambiar los esquemas de temor y prejuicios con que la gente ve a quien fue parte del conflicto armado es primordial para la reconciliación y el perdón. Esto se puede lograr mediante

el acercamiento de la población civil con esos agentes, que están o estuvieron en un proceso de reinserción, mediante charlas o voluntariados".

Cabe resaltar, según lo explicado por Herrera, que la disposición del reinsertado para emerger en la sociedad, es mayor que la actitud ofrecida por la misma. Muchos de ellos pertenecen a grupos de voluntariados que trabajan en distintas zonas de Medellín, donde los jóvenes son propensos a integrar grupos al margen de la ley.

Para abrir la posibilidad de una nueva sociedad civil, hay que olvidar los limitantes de estratos, de escolaridad, de género, de raza, de creencias y demás. Se debe despertar de la pesadilla en la que ha sumergido la guerra al país y abrir los ojos al brillo de la esperanza y al sueño de la paz. Se necesitan factores educativos que permitan despejar el escenario del postconflicto en Colombia, como lo plantea Estella Agudelo Sánchez, licenciada en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana.

"La educación debe repensarse y replantear cuál va a ser el espíritu que motive los nuevos esfuerzos pedagógicos (historiadores, politólogos, economistas, el clero) tendrán que solventar la ausencia, la carencia de claridad sobre el concepto de postconflicto, dentro de un aula de clase, en términos universales, en una sociedad como la nuestra". La docente manifiesta, además, que la paz ha de ser el medio para alcanzar un fin, llamado postconflicto.

En esa vía a la que hace alusión la docente, de implementar un modelo pedagógico, debe establecerse un lenguaje desde la otredad y la alteridad, donde se pueda reconocer al otro, a quien ha vivido al margen de la sociedad civil, hacerlo a partir de lo que es, no de lo que fue, y no precisamente teniendo que olvidar su pasado.

Diálogo permanente

Es que esta obra de crear y construir el postconflicto, para Andrés Felipe Ramírez, politólogo de la Universidad de Antioquia, no es algo que se debe delegar solo a los agentes representantes del Gobierno y de las Farc. La comunidad debe comenzar a tener espacios de diálogo, de discusión, de acuerdos, si queremos pasar de la condición de guerra, desolación, miedo, desesperanza a la escena de la esperanza, la confianza, el amor, que pueda brindar la paz.

Al respecto, cabe decir que hay espa-

cios que generan esos encuentros con la comunidad, como es el caso de las Tertulias Populares, proyecto ganador de la convocatoria de estímulos al Talento Creativo 2014, realizado por la Gobernación de Antioquia.

Las tertulias se realizan cada sábado en el parque del municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá y en la sede de la Fundación Volaren, la cual obtuvo el premio de la Gobernación. La agenda temática del ciclo Basta Ya tiene como objetivo conversar del conflicto armado, de paz, de sociedad civil, de víctimas, de postconflicto. Los espacios son abiertos para toda la comunidad y son dirigidos por una moderadora y un especialista del tema, según el caso.

La creación de espacios para construir una mirada hacia el postconflicto, es un compromiso de muchas organizaciones como las universidades, mediante foros y congresos; los medios de comunicación, con programas educativos y debates;

"Tratar de cambiar los esquemas de temor y prejuicios con que la gente ve a quien fue parte del conflicto armado es primordial para la reconciliación y el perdón".

las corporaciones artísticas comprometidas con campañas que transmiten credibilidad en el proceso, y el clero, que anuncia eventos como el Congreso Paz y Postconflicto, promovido por la Fundación Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, en la Universidad Pontificia Bolivariana con el tema *El respeto por la vida, un camino para la paz.*

Todos los esfuerzos apuntan a que los ciudadanos generen empatía y respeto por las instituciones, a través de la construcción de un orden social con base en la confianza, la lealtad como valor esencial en la interacción ciudadana, entre el sujeto y su entorno. Cada ciudadano debe comprender que el camino para enfrentar las diferencias existentes entre las comunidades es el diálogo permanente. Esto nos permitirá a los colombianos ser los tramoyistas que se aprestan a abrir el telón de un sueño: la paz. ▲



El diálogo es reconocido por muchos como el principal camino para llegar a la paz. La puesta en común de las diferentes ideas es el primer paso. Foto: Alexander Herrera

Beneficia a los niños vulnerables de Niquitao haciendo donaciones de:

- Ropa nueva o usada
- Juguetes
- Artículos para el hogar

Cll 44 N° 42-44

2398797-4484688



Llámanos y recogeremos la donación

Ser incluyentes y críticos: el reto de los medios

Muchos medios de comunicación que informan sobre el conflicto armado en Colombia presentan carencias a la hora de informar. Para especialistas y personas víctimas, esto se debe a la poca escucha a los afectados, a la revictimización que generan en ocasiones y a los fines políticos y económicos que persiguen la mayoría de las veces.

Luisa Fernanda Jaramillo García
luisa.jaramillo@amigo.edu.co

Expertos como Luis Gonzalo Medina Pérez y Carlos Mario Correa Soto, profesores de Comunicación y Periodismo de la Universidad de Antioquia y Eafit, respectivamente, coinciden en que los medios de comunicación apenas están intentando asumir su responsabilidad con el tratamiento informativo sobre el conflicto armado, a raíz de la conciencia y compromiso que ha despertado el tener que informar sobre el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.

Para Gonzalo Medina Pérez, la responsabilidad está presente, pero “se puede ser irresponsable por acción, al informar de manera ilimitada; o por omisión, cuando se informa de una manera precaria, que no orienta, que no ilustra y que por lo tanto hace que un esfuerzo de hallar la paz se vaya malogrando a través de un trabajo que va agotando y quitando fuerza a ese proceso”.

Darío Sierra Aguilar, víctima del conflicto armado, comenta que los medios actúan responsablemente cuando informan de una manera “libre y autónoma”, pero no lo son cuando informan de una manera “sesgada y politiquera”.

Por su parte, Teresita Gaviria, una de las representantes de víctimas escogidas para ir a La Habana, y líder de la asociación Madres de la Candelaria, expresa que los medios informativos no son responsables: “Les ha faltado estar de cara con las víctimas y las dejan como en un rezago por allá abandonadas”.

Informan pero no escuchan

Teresita recuerda momentos en los que ha sido difícil lograr atención de los medios: “No les importaban mucho las víctimas, había que llamarlos: mire yo soy víctima, ustedes también deben cubrir lo que hacemos”. Así mismo, recapitula cuando celebraron los diez años de la asociación y los invitaron al evento y no fueron porque tenían otro con el alcalde de Medellín; luego, a los ocho días, la buscaron y ella les respondió: “¿Recuer-

dan que hace ocho días los invitamos al evento de la asociación y otras víctimas que vinieron de Urabá? Entonces quédense con el alcalde”.

Es un reclamo generalizado que los medios informen también sobre otros temas que hagan visibles a las víctimas y que no solo sean los hechos que victimizan; que den a conocer, por ejemplo, programas como Mientras Volvemos a Casa, que articula el deporte, la recreación y la cultura, “pero infortunadamente los medios no van más allá de mostrar el hecho conflictivo; también deben informar sobre posibles soluciones y programas de resocialización y apoyo para estas personas”, enfatiza Iván Darío Campo Sánchez, quien trabaja en la Corporación Vive con población víctima del desplazamiento forzado.

Para Carlos Mario Correa Soto, docente de Periodismo de Eafit, esta situación se debe, en parte, a que los medios informativos quieren contar la historia de un país en el menor tiempo posible: “Como ocurre en RCN y Caracol, que en una hora nos muestran lo que está pasando aceleradamente”, exigiendo a los periodistas que hagan su labor más rápido para que “quepa más información”. Además, explica que se está logrando una comprensión por parte de los ciudadanos, porque ofrecen muchas versiones, pero pocas historias. De esta manera, muchas veces las voces de las víctimas se limitan al mero registro de una declaración.

En el mismo sentido, Óscar Alberto Morales Orozco, periodista del Noticiero Despierta Antioquia y del periódico Inforiente, considera que los medios de comunicación deben ser incluyentes con las víctimas: “Toda vez que en reiteradas oportunidades le han dado más relevancia al victimario y han desconocido la importancia de los procesos de organización, reconstrucción de tejido social y elaboración del duelo que adelantan las víctimas del conflicto armado”.

“Manipulación consentida no es manipulación, es complicidad”.



Las víctimas del conflicto armado luchan para ser escuchadas e incluidas por los medios de comunicación. Fotoilustración: Jose Alejandro de la Vega

En ocasiones se revictimiza

La revictimización es más conocida desde la Psicología como victimización secundaria. “Este término fue acuñado por Khüne para referirse a todas las agresiones psíquicas (no deliberadas pero efectivas) que la víctima recibe en relación con los profesionales de los servicios sanitarios, policiales, o de la judicatura (...), así como a los efectos del tratamiento informativo por parte de los medios de comunicación”, explica Antonio Ceverino Domínguez, psiquiatra del Instituto de Victimología, en su artículo *Conceptos fundamentales de victimología*.

Luz Ángela Salazar, psicóloga y profesional social del Museo Casa de la Memoria, explica que “los medios tienen una gran responsabilidad, no solo referida al hecho de informar lo sucedido, sino también de denunciar y generar la reflexión sobre los acontecimientos del conflicto”. También manifiesta que en ocasiones se limitan a promover la “desinformación” y vinculan su posición, haciendo señalamientos y permitiendo que se repita la vulneración.

Por otra parte, Javier Monsalve, víctima del desplazamiento, albergado en la Corporación Vive y líder social, sostiene que él y otras personas víctimas se sienten revictimizados por muchas agendas informativas de los medios: “Siempre están tapando tantas cosas del Gobierno”; igualmente, Darío Sierra Aguilar, miembro de Las Madres de la Candelaria, siente que cuando los medios comunican con carácter “sesgado y politiquero” se siente ofendido y con ganas de “compartir el dolor con la asociación”.

Manejos políticos y económicos

Muchas veces los medios de comunicación persiguen intereses económicos y políticos que pueden afectar el trata-

miento de sus contenidos informativos. En relación con lo anterior, Correa Soto, quien además de docente ha sido periodista, afirma que los medios son una mezcla de intereses que afectan la información; así mismo, que “todos los medios colombianos son dependientes; por lo menos, los masivos, son dependientes de la pauta publicitaria, de los compromisos adquiridos con los gobiernos de turno, del poder económico y empresarial”. Añade que hay medios que están luchando por ser independientes como La Silla Vacía; sin embargo, “también depende de la pauta publicitaria y esto afecta indudablemente”.

En el panel sobre el papel de los medios de comunicación en la última campaña electoral a la Presidencia, desarrollado en el programa de opinión Dos puntos de RCN Televisión, los panelistas hicieron evidente el manejo político y económico de la información por parte de los medios, en el contexto de una campaña que giró alrededor de los diálogos de paz.

El periodista Juan Gossaín, afirmó que nunca había visto una “más penosa manipulación de la prensa (...) Manipulación consentida no es manipulación, es complicidad”. También se preguntó por el papel de la prensa: “El problema es que los medios solo muestran lo que les conviene y un periodista no es el que hace depender su información de los intereses de los candidatos y del perjuicio que pueda hacerle al adversario; el periodismo a lo único que debe obedecer es a los principios éticos del oficio”.

Ante este panorama, el profesor Medina Pérez concluye que la mejor manera de que los medios de comunicación sean responsables a la hora de informar sobre el conflicto, es de una manera crítica, mostrando las distintas posiciones, avances y dificultades, y también los programas de resocialización y apoyo a las víctimas, entre otros temas. ▲

QUIERES VIVIR
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE...
 ESTUDIAR, TRABAJAR Y VIAJAR
POR EL MUNDO...

Education World
 STUDIES ABROAD

educationworld.com.co
 Medellín Pbx. +57 (4) 311 57 00

300 485 16 18 educationworldco /EducationWorldColombia /educationworldc info@educationworld.com.co /educationworldcolombia EducationWorldCol

Carrera 66 # 49 B-20 Bloque A 222
 Centro Comercial Los Sauces
 Tel: 322 91 90
 434 01 62

¡Grandes Promociones!

Ortodoncia
 Operatoria
 Urgencias
 Odontología General
 Periodoncia
 Endodoncia

Oral | 70
 Odontología Especializada

Curso completo incluye

- Glamour
- Asesoría de imagen
- Pasarela
- Relaciones humanas
- Maquillaje
- Expresión corporal
- Etiqueta
- Práctica frente a una cámara fotográfica y de video

BEAUTY FASHION
 Agencia de Modelos

Av. Bolívariana Dg74B #32b-83 PBX: 4113868

Fotografos
 Maryory Rua
 Duvan Sepúlveda

Fotografía para toda ocasión

300 288 94 72 - 310 4936470
 221 70 78

Droguería LUIS AMIGÓ & Tienda del peluquero Estilo U

- Medicamentos
 - Cosméticos
 - Productos naturales
 - Productos de aseo personal y más

Domicilios: 4340040

Abrimos de lunes a sábado
 6:00 a.m. - 10:00 p.m.

TRANSVERSAL 51 A # 67B-20 ESTADIO 2 (CERCA A LA UNIVERSIDAD LUIS AMIGÓ)

D D

Distribuimos al por mayor y al detal de los siguientes productos:

Coca-Cola POSTOBON BIG COLA BAVARIA

SERVICIO A DOMICILIO
 222 62 49 5030421
 3127153676 - 3002889472

Servicio a domicilio gratis en los barrios:
 Boston
 Buenos aires
 Salvador
 Milagrosa

Piter Heller y Elkin Ospina
 Se adelanta a la navidad
 Mano a mano numerológico
 Domingo 30 de noviembre
 8 a.m.
 Coliseo centro comercial El Cid
 Caracas con Palacé
 513 99 91 - 314 662 26 38

Andrés Calle
 Productor musical de **HIP HOP**
 Sello cacharriando beats
 Producción audio visual
 el sello sitio restringido films
314 670 06 44

#teenbook
 by MP

Ingresa a nuestro grupo de Asesoras de Imagen:
 Comunícate con nuestra línea gratuita nacional
 018000 12 12 99
 Medellín (4) 361 40 11

www.marketingpersonal.com

APRENDA A HABLAR EN PÚBLICO
CONTANDO CUENTOS.
 Sábados 8 a.m. a 1 p.m.

Inscripciones abiertas para los cursos de CUENTERÍA

Cl 55 # 43-63.
 Tel 239 61 04
 corporacionculturalalvivalabre@gmail.com

aldiez
 ALIMENTOS DIEZ

Restaurante empresarial
 Atención de eventos empresariales y sociales

TEL: 234 74 91 - 422 91 24
 DIRECCIÓN: CR 79 No 57-16
 BARRIO LOS COLORES MEDELLIN

El Grupo Ediperiodicos felicita a los estudiantes de la Facultad de Comunicación por su gran esfuerzo en este proyecto comunicativo.

EL AGUACERO - Santa Rosa
EL ITABUENO - Itagüí
EL COPABACANO - Copacabana

Director: Jairo López - jairoll@une.net.co
 Teléfonos: 436 16 40 - 312 287 43 51 - Medellín

Venta de Camisillas \$20.000

310 493 6470

Colors Dante
Grupo de baile

Contacto: Eliana Salazar Guerra
 Cel: 320 837 6165

IMPREDIGITAL

Diseño - Impresión
 Eventos y Publicidad

Volantes
 Tarjetas de Presentación
 Pendones
 Papelería Corporativa
 Impresión a gran formato

312 899 50 63 - 312 878 80 13 E-mail: impredigital1@gmail.com